

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANGEL SASTRE

Diputados presentes: Acuña, Aldao, Alvarez (A), Alvarez (J. M.), Amenedo, Argañarás, Argerich, Astudillo, Balestra, del Barco, Barraquero, Barraza, Bejarano, Berrondo, Bustamante, Campos, Carbó, Carlés, Carreño, Castro, Cernadas, Contte, Cordero, Coronado, Crouzeilles, Dantas, Demaria, Domínguez, Elordi, Figueroa, Fleming, Fonrouge, Galiano, García Vieyra, Garzón, Gigena, Gouchón, Guevara, Gutiérrez, Hernández, Irigoyen, Iriondo, Lacasa, Laferrère, Lagos, Lamas, Latorre, Ledesma, Leguizamón, Lezica, Lucero, Luro, Machado, Martínez (J.), Martínez (J. A.), Martínez (J. E.), Martínez (M.), Martínez Rufino, Méndez, Monsalve, Moyano, Mugica, Naón, O'Farrell, Oliver, Padilla, Palacios, Parera, Parera Denis, Peluffo, Pera, Pinedo (F.), Pinedo (M. A.), Ponce, de la Riestra, Rodas, Romero, de la Serna, Silva, Silvilat Fernández, Uriburu (F.), Urquiza, Varela, Varela Ortiz, Veria, Vieyra Latorre, Villanueva, Vocos Giménez, Yofre, Zavalla.—**Ausentes con licencia:** Paz.—**Con aviso:** Astrada, Cantón, Comaleras, Correa, Delcasse, Ferrari, Fonseca, González Bonorino, Grandoli, Iturbe, Luna, Luque, Olmos, Ovejero, Robirosa, Roca, Seguí, Uriburu (P.), Victorica.—**Sin aviso:** del Carril, García, Mohando, Rivas, Roldán.

SUMARIO

1

1.—Mensaje del poder ejecutivo remitiendo una nota del señor intendente municipal, relativa á una propuesta para la construcción de un **tránvía eléctrico subterráneo**, en la Capital.

TRANVÍA ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO

2.—Petición particular.

SOLICITUD DE COLSON, PROOKHOUSE Y PYNE

3.—Proyecto de ley, por el señor diputado L. Zavalla, acordando **pensión** á la señora Artemia A. de Tezanos Pinto.

Buenos Aires, julio 13 de 1905.

4.—Proyecto de ley, por el señor diputado A. Carbó y otros, referente á la **acusación de funcionarios públicos**, por delitos electorales.

Al honorable Congreso de la nación.

5.—Termina la discusión del despacho de la comisión de negocios constitucionales, en el proyecto de **reforma de la ley de elecciones**.

Tengo el honor de dirigirme á vuestra honorabilidad acompañando la nota de la intendencia municipal de la capital, con motivo de la solicitud de los señores Colson, Prookhouse y Pyne sobre construcción de un **tránvía eléctrico subterráneo** en esta ciudad, á fin de que vuestra honorabilidad se sirva tomarla en consideración al resolver lo que corresponda con relación á solicitudes análogas pendientes de la resolución del honorable congreso.

3.—Aprobado el despacho de la mayoría de la comisión de negocios constitucionales, vuelve á comisión el de la minoría, referente á la **reforma de la constitución**, con una moción del señor diputado Gouchón sobre **representación de las minorías**.

Dios guarde á vuestra honorabilidad.

—En Buenos Aires, á 15 de julio de 1905, el señor presidente declara reabierto la sesión á las 4 y 25 p. m.

MANUEL QUINTANA
RAPAEL CASTILLO

4

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 113

DE LA LEY DE ELECCIONES

ACUSACIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diputados, etc.

Artículo 1. Agrégase al artículo 113 de la ley número 4161 sobre elecciones nacionales la cláusula siguiente: "No se incluye en esta disposición las acusaciones contra los funcionarios públicos de la nación ó de las provincias, á quienes corresponda el juicio político, mientras éste no quede concluido ante el tribunal que corresponda"

Art. 2.º Comuníquese, etc.

A. Carbó. — C. A. Aldao. — C. Ponce. — C. del Barco. — J. A. Roca (hijo). — Ernesto E. Padilla. — Adolfo Contte. — Gonzalo Figueroa.

Sr. Carbó—Pido la palabra.

Parecerá extraño, señor presidente, que haya necesidad de presentar un proyecto de ley como el que acaba de leerse; sin embargo, tanto yo como los señores diputados que me acompañan y lo firman y que me han honrado con el encargo de informarlo, lo hemos creído necesario, en vista de hechos producidos que amenazan de una manera alarmante la existencia del régimen federal de la república.

Son conocidos los principios fundamentales de nuestro gobierno, y son conocidas las luminosas discusiones que ha habido al respecto, tanto en la época de la constitución del 53, como en la época de su reforma.

Sabido es que en la primitiva constitución del año 53, entre otras disposiciones existía una en virtud de la cual los gobernadores de provincia podían ser acusados y encausados ante el congreso de la nación; sabido es también que al hacer su reforma los constituyentes eliminaron esa cláusula fundamental, y esto es lo importante. A la luz de la interpretación de los principios del gobierno federal, hicieron desaparecer una cláusula que en cierta manera ponía en manos del congreso la vida misma de las instituciones federales, fundándose en que era necesario reintegrar

á las provincias todos los elementos de vida é independencia autónoma que el régimen federal requiere.

Leyes posteriores han confirmado estos principios, y por eso es que digo que parecerá extraño presentar un proyecto de ley que vaya á establecer de una manera clara y categórica principios que rigen en nuestro sistema de gobierno, que son axiomáticos á los ojos de cualquier persona un poco versada en el derecho público argentino.

Pero se producen hechos que admiten en el espíritu de cada uno la posibilidad de falsas interpretaciones de las cláusulas constitucionales, que no tienen por objeto molestar á las personas, sino que van directamente á herir las instituciones que rigen en la república, y es por esto que hemos creído oportuno presentar este proyecto que tiende á agregar al artículo 113 de la ley de elecciones, una cláusula en cuya virtud se excluye á los funcionarios nacionales ó provinciales á quienes corresponde ser juzgados por el juicio político de acuerdo con la constitución nacional ó con las constituciones de las provincias.

No se me escapa la objeción que puede hacerse á este asunto que ha sido debatido públicamente, estableciéndose la teoría errónea de que no hay fuero ni privilegio provincial. Hay fueros y privilegios provinciales y fueros y privilegios nacionales, en el concepto de la constitución que nos rige, porque sería inadmisibles de todo punto de vista que una constitución hecha como la nuestra por delegación de los estados que forman la nación, pusiera en manos del poder central, la destrucción de las instituciones que emanan de esa misma constitución. Este es el principio fundamental que nos rige y que está consagrado en todas las constituciones de los estados; y sin embargo se cree que un funcionario en tales condiciones puede ser llevado por una acusación cualquiera ante un tribunal ordinario ó federal. Esos hombres, esos funcionarios, mejor dicho, que representan los poderes públicos, no puedan absolutamente renunciar á los fueros y privilegios que les acuerda la constitución del estado, como no pueden los diputados desprenderse de los suyos, porque no son propiamente privilegios de las personas, sino que se acuerdan á la calidad de los funcionarios que representan el poder público.

Además, al aceptar la teoría de los

hechos recientes, fácil es comprender con cuánta facilidad se llegaría á pervertir nuestro régimen de gobierno, con sólo la intromisión en esa manera de los jueces de la justicia común ó federal llamando á juicio y encausando sin más trámite á los miembros de los poderes públicos, ya sean de la nación ó de las provincias. Se comprende que sería un medio de intervenir constantemente en ellas, porque así como se puede limitar á un solo funcionario público la acusación, puede haber personas que tengan interés en provocar un conflicto general y empiecen á llevar acusaciones á los diversos miembros de los poderes. Llegaría el caso extraño, el caso anormal de una intervención hecha por funcionarios nacionales ó tribunales de cualquiera otro carácter á una provincia sin formas institucionales.

Estas cosas tienen sus formas, tienen sus reglas, única manera de asegurar no solamente el prestigio de las instituciones que nos rigen, sino la estabilidad de gobierno, que debe ser la aspiración suprema de todos.

Creo, señor presidente, que ya que se han producido hechos en virtud de los cuales, repito, estamos autorizados á creer que es fácil confundir — no sé si por ignorancia, no sé si por olvido de los preceptos fundamentales que nos rigen, no sé si por cualquier otra causa, — esos principios, es necesario que hagamos en la ley esta especie de aclaración, este agregado, con el cual se advierte que no ha podido ser, que no es, que no puede ser de ninguna manera el propósito de una ley el entregar así los funcionarios públicos de las provincias ó de la nación á la justicia ordinaria, sin más tramitación, sin que ésta siga los procedimientos ó reglas que, como he dicho antes, han sido dictados para asegurar la vida de los estados.

Elo no significa en manera alguna la impunidad para los que delinquen. Yo no tengo necesidad de decir por qué. Todos los señores diputados, que conocen nuestro derecho, todos los señores diputados, que conocen las reglas de procedimiento, saben que esto no significa en manera alguna la impunidad, saben que existe el juicio político, saben que aunque éste no diera resultado, la acción contra los delitos comunes siempre puede entablarse cuando desaparecen los fueros que amparan á una persona.

Creo, señor presidente, que bastan estas breves consideraciones para fundar este proyecto de ley; y en tal virtud, lo entrego á la cámara, solicitando para él el apoyo necesario, aun cuando lleva la firma de muchos señores diputados, para que pase á la comisión respectiva, esperando que ésta ha de tener mejor juicio que el que habla para elegir la oportunidad conveniente para su despacho.

Nada más.

—Apoyado, pasa el proyecto á la comisión de negocios constitucionales.

5

ORDEN DEL DÍA

REFORMA DE LA LEY DE ELECCIONES

Sr. Presidente—Continúa la discusión sobre el proyecto de reforma á la ley electoral.

—Ocupa su banca en el recinto el señor ministro del interior, doctor Rafael Castillo.

Sr. Oliver—Pido la palabra.

Voy á entrar, señor presidente, lleno de temor á esta discusión, después de haber leído y estudiado sus antecedentes parlamentarios. No pueden recorrerse esos debates sin sentirse empujado ante el brillo de la discusión, ante los argumentos sólidos, ante la erudición y ante la altura de concepto que en general reina en ella. Y principalmente de aquellos que consiguieron al fin hacer triunfar la ley que nos rige, abriéndose camino por entre las preocupaciones y los intereses políticos que muchas veces ponen ciegamente barreras á toda innovación.

Yo no voy á hacer el estudio detenido de los fundamentos en que se apoya la reforma que se quiere ahora introducir; pero creo que tengo el deber de manifestar cuál es mi opinión, tomando por base de discusión lo que hay de más fundamental en esta materia, que son los argumentos aducidos por el señor presidente de la república en el mensaje con que inauguró su gobierno. Esto mismo implica que voy á circunscribir la discusión, procurando ser lo

más breve posible, porque creo que la cámara ya está saturada en esta materia, y que, francamente, los votos están ya hechos.

En ese mensaje se puntualiza la argumentación contra el actual sistema electoral.

Por mi parte, dice el primer magistrado, sin atribuirle resueltamente como una de sus consecuencias el comercio del voto, entiendo: primero, que no encuadra dentro del precepto constitucional; segundo, temo que rebaje en el porvenir, si continua por mucho tiempo en vigencia, el alto nivel de la honorable cámara de diputados; tercero, me inquieta también que pueda contribuir á la dislocación ó siquiera al quebrantamiento de los partidos nacionales.

Indudablemente la forma uninominal que la ley actual ha adoptado, no solamente se encuadra dentro de la constitución, si no que se encuadra en ella mucho más cómodamente que el sistema de lista.

Una breve exposición de cómo entiendo la disposición constitucional que rige la materia me parece necesaria como punto de partida.

Después de largas luchas, de guerras civiles, que estuvieron á punto de disgregar la nación provocando la formación de pequeñas nacionalidades, la constitución nacional se preocupó de organizar los poderes, y principalmente el legislativo, en forma tal que jamás los antagonismos de provincia pudieran llevarnos otra vez al borde de la desaparición de la nacionalidad.

Las provincias que entraron á formar la nación eran entidades del derecho público, entidades soberanas y como á tales se le da su representación en el senado, sin atender á su extensión, á sus riquezas y á su población.

Dos senadores por cada una de ellas forman esa conferencia de provincias que llamamos senado de la nación. Las fuerzas están allí perfectamente equilibradas entre las pequeñas, que tienen suspicacias y susceptibilidades fundadas, y las grandes que siempre han tenido tendencias á la absorción.

Pero se organizaba dentro del poder legislativo otra rama de funciones más importantes: esta cámara de diputados, á la que se confería la facultad de legislar sobre aquello que puede tiranizar y empobrecer á los pueblos: la facultad de dictar leyes sobre reclutamiento de tropas y formación de ejércitos y la de

imponer contribuciones. Y entonces se buscó un medio ingenioso para evitar que dentro del seno de esta asamblea popular pudieran prevalecer los intereses de provincia y ahogar con el voto las más populosas á las menos pobladas que entraban á formar parte de la nación.

Es con este propósito que al organizar la cámara de diputados, se procura borrar la entidad provincia haciéndola desaparecer en absoluto de la constitución, para dar nacimiento á otra entidad: la entidad «pueblo de la nación».

Y así se dice: los diputados son representantes del pueblo de la nación en razón de uno por cada tantos mil habitantes; y como si esto no bastara, quiere borrar la denominación y límites provinciales y establece que á los efectos de esta representación las provincias dejan de ser tales para constituir distritos de un solo estado que es la nación.

Al organizar así esta cámara ¿han entendido los constituyentes pronunciarse sobre el sistema electoral? ¿han entendido establecer que estos diputados de la nación no podrán ser elegidos por el voto uninominal sino por el voto de lista? La contestación me parece fácil.

La única preocupación de los constituyentes en cuanto á la organización de la cámara de diputados, ha sido la de constituir una asamblea nacional, y como tenían que referirse á las provincias porque éstas son las que organizan de una manera inmediata la representación nacional, han dicho que las provincias serian meros distritos de un solo estado. ¿Y qué podían entender por distritos? Lo que antes, ahora y siempre en nuestro idioma se ha entendido por tal. Basta tomar cualquier léxico para ver que distrito es demarcación más ó menos extensa, que, con otras, subdivide una provincia, comarca ó población para facilitar su administración y gobierno.

No fué, pues, el propósito de los constituyentes, al hablar de distrito, pronunciarse sobre la forma de la elección desde que expresamente impusieron al congreso el mandato de dictar una ley para hacer efectiva la *elección directa* de los diputados de la nación. Palabras textuales del artículo 41 de la constitución nacional.

La ley electoral es una ley de experimentación, es una ley que en todos

los países está constantemente, puede decirse, sobre el tapete parlamentario; que tiene que ajustarse á las diversas modalidades y fases que va tomando el pueblo; á las costumbres, á los adelantos políticos, á los peligros que se pueden presentar en un momento dado. Es, en definitiva, una ley de experimentación, que debe siempre, por cambios sucesivos, tender á este fin: dar al pueblo la representación más verdadera, la representación más exacta.

Es por esto que en la constitución nacional no se ha establecido un sistema especial de elección. Tanto nuestra constitución como la americana, se han limitado á dar las bases fundamentales constitucionales, de la elección; no las bases del procedimiento electoral. Y estas bases en nuestra constitución son simplemente las siguientes: 1ª, que los diputados al congreso son representantes del pueblo de la nación y no de las provincias como entidad, ni del pueblo de las provincias; 2ª, que la designación provincia no se toma absolutamente en cuenta para esa representación sino considerada cada provincia como un simple distrito de la nación; 3ª, que la elección debe ser popular y directa, es decir, que cada ciudadano tiene el derecho del voto y debe darlo por el nombre del candidato á diputado; 4ª, que cada fracción del pueblo de la nación, como lo indique la ley con arreglo al censo, tendrá el derecho de designar un diputado.

Los términos de la constitución son perfectamente claros; no se prestan á cavilosasidades, á argucias, á metafísicas, para desentrañar algo obscuro que esté entre las rendijas de las disposiciones. Y esta claridad se manifiesta precisamente cuando la constitución menciona las limitaciones constitucionales. No hay limitaciones constitucionales tácitas: todas son expresas, y sería prolijo tener que enumerarlas aquí.

Por otra parte, tanto Alberdi al formular sus Bases como los constituyentes, tenían como modelo la constitución americana, esa constitución que no había dado ningún sistema electoral; y no es presumible que si hubieran querido salir de ese molde lo hubieran hecho de una manera ambigua, sin decir clara y terminantemente cuál era el propósito que perseguían.

Si hubieran querido imponer el sistema de la elección por lista, es seguro que se encontraría prescripto en la

constitución, como se han encontrado prescriptas todas las demás limitaciones constitucionales.

Debe tenerse también presente para interpretar la intención de los constituyentes, que todos ellos se reunían para dar esta gran solución nacional después de haber sido en su mayor parte proscriptos en las contiendas políticas del país. Habían sido todos ellos víctimas de ese sistema de lista que había imperado en nuestro país desde el principio de la vida independiente, y no es de presumir que vinieran á implantar un instrumento con el cual habían sido arrojados de los comicios populares.

Pero me parece que hay otra razón de carácter más fundamental.

Esta preocupación de eliminar la entidad provincial al constituir la cámara popular, tiene un alto significado y un gran propósito político. Las provincias son de población muy desigual: aquella diferencia que existía antes, podemos decir que se ha aumentado, se ha multiplicado y un nuevo censo nos lo revelaría de una manera más completa, en una desproporción enorme entre las grandes provincias y las pequeñas, cuya población, lejos de aumentar se mantiene estacionaria. Y he ahí la previsión de la constitución al apartar la idea de provincia en la representación nacional, al eliminar esa designación, al eliminar los sentimientos locales que podría hacer surgir, para dar lugar á un solo propósito, á un solo sentimiento: el sentimiento de los intereses generales del país.

Desde el momento que las diputaciones hubieran podido distinguirse por procedencia de provincias, es seguro que los intereses de las pequeñas provincias estarían á merced completamente de las grandes.

Pero no es solamente con respecto á las diputaciones donde se presentaba este peligro. Los electores del primer magistrado de la nación, son elegidos popularmente, en la misma forma en que se eligen los diputados.

Es la misma ley la que sirve para esa elección, y la constitución ha querido que el presidente de la república sea, no la encarnación del sentimiento de las provincias, ni la encarnación de la voluntad de los gobiernos de provincias, sino encarnación del sentimiento nacional, del sentimiento del pueblo.

Entonces era más necesario aún evi-

tar que las provincias de mucha población pudieran pesar de tal manera, en una elección, que el resultado fuera no tener en cuenta la voluntad de las provincias pequeñas.

Me parece que la afirmación del mensaje no está corroborada por todo aquello en que la opinión puede manifestarse.

La prensa, por lo menos la que conozco, no se ha manifestado adversa á la ley vigente ni la ha tachado de inconstitucional. Precisamente «El Diario» que más ha concurrido á la formación del gobierno presente, ha dado una nota perfectamente exacta respecto de esta cuestión, en una serie de notables artículos en los cuales se trasluce un distinguido jurisconsulto.

«La constitución nacional argentina no ha prescrito ningún sistema electoral determinado, ni tampoco ha prohibido la adopción de cualquiera en que se respeten las bases—solo bases—que ella ha establecido.

No hay, en la constitución, prescripción alguna por la cual se establezca el derecho de cada elector para votar por tantos candidatos cuantos sean los diputados que deba elegir el «distrito».

Pero además de que la opinión de la prensa, está el consenso popular, que, según los hombres de estado y tradidistas, tiene una gran importancia, puesto que en definitiva las leyes se dictan para el pueblo.

Dictada la ley por el congreso, en su primer ensayo ha concurrido á los comicios un gran número de ciudadanos. Esto demuestra que el consenso popular está en el sentido de que cree que esta ley garante mucho mejor sus derechos que las anteriores ante las cuales había hecho el vacío.

Pero aun hay mas: las sesenta circunscripciones que han elegido, han tenido un término medio de dos ó tres candidatos, y basta pensar cuántas esperanzas han muerto en flor, cuántos candidatos, cuántos comités, cuántos partidos, cuántos ciudadanos se han sentido decepcionados ante el resultado de la lucha electoral; y sin embargo, no ha habido uno solo á quien se le haya ocurrido llevar á los tribunales la cuestión de la constitucionalidad de la ley.

Pero me parece que esta afirmación del mensaje, en cuanto á la inconstitucionalidad, aparte de inaceptable, es inconveniente y arriesgada. Los actos de todo poder tienen la presunción de encuadrarse dentro de la constitución,

y se reputan constitucionales mientras la Suprema corte nacional, única autoridad para hacer tales declaraciones, no lo haga.

Esta cuestión de la constitucionalidad es de una gravedad extraordinaria. Sabemos que nuestra Corte suprema y nuestras organizaciones federales han sido tomadas de la constitución y organización de la Corte federal de los Estados Unidos; y aquel alto tribunal, que es el más elevado del mundo que tenga la gran facultad, esencialmente de origen americano, de declarar la constitucionalidad ó inconstitucionalidad de la ley, ha establecido en 1879 lo siguiente en que campea el buen sentido sajón, y que traduzco literalmente: «Cuando esta Corte es llamada á decidir si una ley del congreso ó un acto de otro poder es inconstitucional, un debido respeto por las ramas coordinadas del gobierno exige que declaremos que han transgredido sus facultades constitucionales, solamente cuando esto sea tan evidente que no admita duda alguna.» Y agrega: «Esta ha sido normalmente la conducta de esta Corte respecto de las leyes dictadas por el congreso, y á pesar de los numerosísimos casos de inconstitucionalidad alegados ante ella, las veces que ha declarado que una ley del congreso es nula por ser inconstitucional, pueden contarse con los dedos.»

El mensaje en realidad, no expresa más que una duda, al decir que entiende que no encuadra la ley dentro del precepto constitucional. No es una afirmación categórica; es el congreso el que con su sanción decidirá si esta primera y fundamental razón que se da contra la ley electoral es valedera, si la ley electoral es ó no contraria á la constitución.

¿Y cuáles serían las consecuencias de la anulación de esta ley, tomando como base la razón fundamental de que la ley es contraria á la constitución?

Creo que las consecuencias son temibles, señor presidente.

Con arreglo á nuestro sistema de gobierno, no hay función alguna gubernamental que no emane del pueblo; él es la única raíz de todo gobierno, la única raíz de toda autoridad.

Y cuando nos presentáramos diciéndole al pueblo que la primera autoridad de la nación está constituida con arreglo á una ley inconstitucional, cometeríamos una imprudencia que podría pasar tal vez desapercibida en otro país,

pero que en el nuestro puede dar lugar á graves consecuencias. Entre nosotros, á días de bonanza, suceden de pronto tempestades revolucionarias, muchas veces tan injustificadas como la del 4 de febrero. Y es de temer que llevando al convencimiento del pueblo la idea de que la autoridad presidencial ha sido elegida como ella misma lo manifiesta en virtud de una ley inconstitucional, se debilitaran mucho los vínculos de respeto que el pueblo debe tener por su gobierno. Yo temo, señor, por ese pueblo movedizo; temo por el ejército, compuesto de ciudadanos; por la armada; por todo lo que constituye la fuerza de nuestras instituciones; temo que se les lleve estas afirmaciones, que van á contribuir aún más á fomentar el espíritu levantisco contra las autoridades. Y es por esto que he clasificado de imprudente esta declaración.

Y creo también que los que en esta cámara defendemos la constitucionalidad de la ley estamos consolidando la autoridad del primer magistrado y no queremos que haya sombra alguna respecto de la justicia de esa autoridad. En cuanto á los amigos complacientes, que se prestan á sostener, á nombre del presidente, la inconstitucionalidad de la ley, están minando la base legal del gobierno y produciendo una herida profunda en la autoridad del primer magistrado.

Sr. Vocos Giménez — Pero todos muy bien intencionados.

Sr. Oliver — Pero la intención no basta.

Se ha calificado este espíritu interpretativo de la constitución de *constitucionalismo absoluto del gobierno*.

Yo creo que felizmente no existe tal constitucionalismo absoluto. En materia de derecho, lo absoluto no existe; y en cuanto al gobierno, sabemos que lo relativo es la regla.

Me sería muy fácil demostrar que no hay tal constitucionalismo absoluto, trayendo ante la cámara, ligeramente expuestos, algunos casos.

El primer decreto del actual presidente fué para designar á uno de nuestros dignos compañeros para la cartera de obras públicas. Ese sólo hecho constitucional importaba su cesación en el mandato de diputado é importaba un decreto inmediato convocando al pueblo de la capital á elegir el reemplazante. A pesar de todo, ese decreto no se dictó y la vacante se dejó subsistente. Se

produce poco después el lamentable fallecimiento del general Capdevila. El poder ejecutivo decreta las honras fúnebres, lo que quiere decir que se daba por notificado el suceso; y sin embargo, no convoca al pueblo á elecciones. Fué recién por incitaciones de los diarios, que se dictó el decreto convocando á elecciones para llenar estas vacantes.

Yo creo que el poder ejecutivo hizo perfectamente bien; creo que no había necesidad de conmover una parte de la capital con una elección cuyo resultado iba á ser traer mandatarios por dos meses al seno de la cámara. La constitución, es cierto, dice que inmediatamente debe ser convocado el pueblo; pero creo que, en este caso, el poder ejecutivo, con perfecta razón, dejaba de ser constitucionalista absoluto, para buscar el bien del pueblo, que es uno de los fines del preámbulo de nuestra constitución.

Hay otro caso: el poder ejecutivo ha remitido aquí entre las leyes de impuestos, la que establece los impuestos internos. Pues bien, esa ley, dentro de toda duda, según las palabras del miembro informante de la mayoría, es inconstitucional. No habrá nadie que pueda acomodar el artículo 4.º de la constitución con los impuestos internos, por que son un impuesto al consumo, y por consiguiente nunca puede ser proporcional á la población de las provincias. No es una novedad, puesto que eso se dijo y se repitió en el senado al establecerse los impuestos; pero el doctor Vicente Fidel López, ministro entonces, consiguió que pasara la ley, alegando las imperiosas é imprescindibles necesidades del país. Este gobierno, á pesar de la disposición constitucional, ha incluido entre los recursos del año próximo los impuestos internos.

Todo esto quiere decir que no hay constitucionalismo absoluto, sino una interpretación del espíritu de la constitución.

Sr. Lucero — Eso es el constitucionalismo absoluto.

Sr. Oliver — Nó, señor; es relativo.

Sr. Lucero — Es absoluto.

Sr. Oliver — Entonces, no estamos de acuerdo en determinar lo que es absoluto. Absoluto es lo que no admite excepción, lo que se presenta igual.

Sr. Lucero — Sería necesario entrar á discutir en la teología lo que es absoluto.

Sr. Oliver — Como yo no voy á ha-

cer teología en esta parte, no tengo por qué seguir en ese terreno.

Hay otro caso, que interesa á la diputación por Buenos Aires, en el que también el gobierno ha procedido con verdadero criterio, relativo. Entre los impuestos proyectados por el poder ejecutivo, están los relativos á la exportación, que son impuestos que gravitan exclusivamente sobre una provincia. Son impuestos que no admiten la tendencia igualitaria de la constitución en materia impositiva. Son impuestos reprobados por la ciencia. Sin embargo, los ha traído el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque las necesidades del país lo exigen.

Para demostrar mejor cuál es el criterio del poder ejecutivo, voy á traer un dato importante que demuestra su amplio criterio en materia de interpretación constitucional.

Apenas constituido el nuevo gobierno, ó más bien dicho inmediatamente después de su elección, el órgano en la prensa «La Opinión» que había hecho toda esa campaña, triunfante, publica la biografía del primer magistrado de la nación, del presidente electo, y en ella se encuentra este rasgo que más que cualquiera otra cosa indica el elevado criterio del poder ejecutivo, que no es de ninguna manera absoluto en materia constitucional sino que es relativo. Dice así en una biografía, muy bien escrita por cierto:

«En 1861 el voto de sus conciudadanos lo llevó á la cámara de diputados de la nación; fué entonces cuando alguien observó que el doctor Quintana no tenía la edad requerida por la constitución para ocupar una banca en el parlamento de su país dando lugar esta observación á que don Dalmacio Vélez Sarsfield respondiera en la forma más honrosa para el joven diputado.

«La cláusula constitucional citada, dijo el ilustre cordobés, responde al propósito de garantizar el discernimiento del electo; pero tratándose del doctor Manuel Quintana, la notoriedad de su preparación y su talento excluye la duda...

He aquí, pues, una interpretación relativa al caso y no un constitucionalismo absoluto como ha pretendido el señor diputado miembro informante de la mayoría de la comisión. El constitucionalismo absoluto pertenece á los orígenes del constitucionalismo americano; es algo ya que está en los arsenales, donde se guardan las cosas viejas; fué ese constitucionalismo absoluto el que

llevó á la federación americana al borde de su perdición; y entonces vinieron los nuevos criterios de los federalistas, de Jefferson, de Madison, de Jay y otros á establecer la interpretación constitucional en la única forma en que se puede hacer dentro de los altos propósitos indicados en el preámbulo de la constitución. (*¡Muy bien!*)

La segunda razón que se da para derogar la ley actual es ésta: «inquieta también que pueda contribuir á la disolución, siquiera al debilitamiento de los partidos nacionales.»

Yo creo, señor presidente, ante todo, que los partidos nacionales no existen, y que por consiguiente mal pueden disolverse ó debilitarse. Entiendo por partido aquel conjunto numeroso de hombres que se proponen obtener ciertas mejoras políticas, usando de los recursos políticos que la constitución del país les da. Esos hombres persiguen un propósito que se ha de traducir en medidas de legislación.

Entre nosotros, han existido, indudablemente, los partidos políticos unitario y federal. Y yo quisiera saber si los unitarios, que con epítetos tan dulces eran clasificados por los adversarios políticos, tuvieron alguna vez cabida en las listas ó si se les permitió siquiera la llegada á los atrios. Entonces reinaba el sistema de que está tan enamorado el miembro informante de la comisión.

Desaparecida aquella cuestión por la constitución nacional, hubo también un partido nacional, un partido que se fundaba principalmente en las tendencias de las provincias contra la tendencia absorbente de Buenos Aires y que llevaba un propósito definido: la federalización de esta capital, que debía ser el *urbi mater* de todos los argentinos.

Ese partido subsistió en el gobierno, realizó sus propósitos; las prevenciones y antagonismos que antes habían existido entre la capital y las provincias desaparecieron, y si no desaparecieron, se esfumaron; aquel partido se encontró con todas las posiciones, en el orden nacional y provincial, y el solo hecho de estar en el gobierno le dió vínculos suficientes para continuar subsistiendo. Debimos, sin embargo, á él una gran ventaja en el orden nacional: que por el hecho mismo de ser gobierno, se constituyó en el paladín de la paz interna, haciendo de esta manera, aunque

Julio 15 de 1905

CÁMARA DE DIPUTADOS

11.ª sesión ordinaria

en su propio beneficio, un bien grandísimo á la nación.

Pero, desaparecidas esas cuestiones que alentaban la existencia de ese partido, ¿á qué quedó reducido? ¿Cuáles son los principios del partido nacional, que no sean los principios de cualquier partido? ¿Cuáles son los principios y programas de las fracciones en que se ha dividido el partido nacional? Basta leer uno para leerlos todos: la observancia fiel de la constitución, la honradez administrativa, el reconocimiento de los derechos populares.... la cantilena de toda la vida, en todos los programas de todos los partidos, exactamente igual.

Yo no tengo que demorarme mucho en demostrar que no hay partidos en el país, aunque puede haber, más ó menos, ciertas tendencias que llegan alguna vez á condensarse, puesto que esto mismo ha sido reconocido por los hombres que más interés tenían en probar que existían partidos. Me refiero al general Roca y al doctor Peilegrini.

Pero el mismo proceso de constitución de este gobierno, ¿no es una prueba evidente de que no existen partidos? ¿La convención electoral, que fué una idea salvadora, indudablemente, en aquel momento, no tuvo por única razón de ser precisamente la falta de partidos que pudieran traer una solución nacional respecto de la presidencia?

Aquella convención nacional se organizó sin ningún espíritu de partido, determinando calidades en abstracto para venir á tener representantes en concreto.

Viene en seguida la lucha electoral, y la lucha electoral no se hace teniendo el actual presidente ningún partido que lo apoyara, partido propio, sino simplemente las situaciones provinciales que estaban en el gobierno y que pertenecían al partido nacional. Entonces, ha sido una suerte para el país que se haya producido esta solución, que nos ha garantido la tranquilidad de un gobierno, pero que ha venido, no por la acción de los partidos, sino simplemente por la acción de la falta de partidos.

Sr. Castro—[Por la acción del partido nacional]

Sr. Oliver—[Por la acción del partido nacional!...]

Es muy curioso, señor presidente, que un partido que dice que tiene la fuerza y que puede hacer una presidencia, lleve á ésta precisamente al hombre que

lo ha combatido toda la vida, que ha sido su enemigo constante. Entonces quiere decir que los partidos no combaten para hacer triunfar ideas ó principios, desde que, llegado el momento de constituir un gobierno, lo mismo les da Juan que Pedro.

Sr. Castro—Es que el partido nacional no combate hombres; y una prueba de ello es lo que dice el señor diputado!

Sr. Iriondo—Pero ha llevado á la presidencia á un opositor á las ideas sostenidas por el partido nacional.

Sr. Oliver—Entonces quiere decir que el partido ha combatido toda la vida para llevar, como solución práctica, de hecho, al gobierno, precisamente al que ha sostenido la bandera contraria.

Sr. Castro—Es para refrescarse y prolongarse en el tiempo, señor diputado. (*Risas*). Por eso el partido nacional ha vivido un cuarto de siglo y seguirá viviendo!

Sr. Oliver— Me felicitaré de ello por el señor diputado. (*Risas*).

Sr. Castro— Porque sabe asimilar elementos, porque no se fija en hombres. No se ocupa de cuestiones pequeñas, sino en cuestiones muy grandes, como la federalización de esta capital, que, como ha dicho el señor diputado, es la capital de todos los argentinos. Y se han realizado muchísimos otros grandes hechos, cuyo autor ha sido el partido nacional!

Sr. Vedia— Que responden al mismo espíritu con que se sancionó la ley uninominal. (*Risas*).

Sr. Lucero—Y que continúa en el mismo espíritu. (*Risas*).

Sr. Oliver—Se habla, señor, de los programas; y si es cierto que debemos leer toda la verdad cuando hablamos ante el pueblo, yo pregunto y pido que se me conteste con lealtad: ¿en qué consisten esos programas? ¿dónde está la diferencia de un programa con otro?

Tomemos cualquiera de las provincias. El señor diputado Carbó, que con un elocuentísimo discurso ha defendido sus ideas, nos hablaba de programas. Y yo pregunto: en Entre Ríos ¿qué programa tiene el gobierno? ¿qué programa tiene la oposición? Exactamente el mismo: unos que están en el gobierno y otros que quieren estar!

Sr. Lucero—El programa de la oposición es el que se opone al gobierno.

Sr. Oliver—¿La simple oposición al gobierno? Se necesitaría ser un país

muy primitivo, un país muy atrasado, para que eso constituyera un programa de gobierno!

Sr. Lucero — Sin embargo, en Inglaterra, la costumbre política ha establecido que haya necesariamente gobierno y oposición; y esto, de tal manera, que la oposición inglesa se la llama la oposición de su majestad, como se dice gobierno de su majestad. Oposición y gobierno, pues, forman como los dos órganos deliberativos de una misma entidad, que es el rey, el soberano.

Así, el gobierno significa ya, por sí sólo, un programa, y la oposición un otro programa.

Sr. Oliver — Pero no un programa de ideas, sino un programa de propósitos de estar en el gobierno.

Sr. Balestra — Es que el rey reina, pero no gobierna,

Por eso está el soberano arriba de todos los partidos, que son los que gobiernan.

Sr. Lucero — Por eso la oposición concurre á la acción del gobierno y se le llama oposición de su majestad; como al gobierno, gobierno de su majestad.

Sr. Balestra — Pero es que aquí no tenemos *su majestad!* (Risas. Aplausos).

Sr. Lucero — Es que el señor diputado mismo acaba de hacer la diferencia: su majestad reina, pero no gobierna. Su majestad representa el valor simbólico de una idea histórica personificada. Ciertamente hay una gran diferencia entre su majestad, rey de Inglaterra, y el presidente de la República Argentina. Entre nosotros no tenemos más majestad que la ley, que reina y gobierna. . . .

Sr. Balestra — Eso es.

Sr. Lucero — . . . Como un perfecto tirano. Es así como las oposiciones nuevas, que tienen un programa político, no son oposiciones á la ley sino oposiciones dentro de la ley, en la misma acepción en que los partidos ingleses forman la oposición ó el gobierno de su majestad.

Sr. Balestra — Exactamente: pero las leyes deben ser para todos y no para uno solo.

Sr. Presidente — Sírvanse los señores diputados no interrumpir.

Sr. Oliver — Me parece que el remedio que se ofrece para reanimar estos partidos que no existen es completamente ineficaz.

La lista vigoriza, si, señor; la lista vi-

goriza á los comités, pero no á los partidos. Y una prueba palmaria de esto, es que después de haber regido durante medio siglo ese sistema de la lista, nos encontramos con que este sistema vigorizante ha actuado en el vacío: no hay partidos, según se ha declarado por muchos hombres públicos, y creo que el señor ministro del interior ha hecho suya esta opinión.

El efecto de la lista es simplemente organizar la máquina electoral. Todos la hemos visto funcionar, porque tenemos alguna experiencia.

Al amparo de la lista nacen esos caudillos que tanto se temen, esos caudillos parroquiales, esos caudillos menudos; y nacen, porque necesitan de ese ambiente que es de rarefacción: la falta de votantes hace nacer esos caudillos.

Cuando se trate de las circunscripciones; cuando todo el mundo vaya á votar no habrá caudillos que puedan llevarlo á las urnas. Por medio de la lista se suprime el voto directo del pueblo, pasándolo al comité: el pueblo vota indirectamente: es una entidad entre el votante y las urnas, el comité que compone la lista.

¿Y cómo se forma esta lista? Me refiero, principalmente, á los comités gubernativos, porque está demostrado que el que triunfa por la lista siempre es el gobierno. Esta lista no se forma buscando las eminencias de carácter ni las intelectuales, por una razón muy sencilla: porque el partido y el comité van á operar con esos hombres dentro del congreso y en las altas esferas de la administración. Y aunque hay muchas excepciones, y desde ya, para evitar interrupciones, declaro que la mitad de esta cámara es una excepción, la verdad es que aquellos — y me refiero á la experiencia que cada uno tenga de la vida política de su provincia — que aquellos que más consiguen halagar la vanidad, el amor propio y la ambición del jefe del comité, son los que tienen más asegurado su derecho á ser incluidos en la lista (Risas). Entonces resulta el fenómeno de la selección regresiva: no son electos los de más carácter, no son electos los más inteligentes sino aquellos que, como decía Víctor Hugo, tienen conciencia de goma elástica y giran según los vientos (¡Muy bien! Aplausos.)

Por otra parte, señor, me parece que el propósito de una ley electoral debe ser el propósito fundamental que enuncié al principio: debe ser que todo

ciudadano concurra al atrio á dar su voto y por medio de éste contribuya á formar las autoridades. Tal debe ser su propósito: mover á los votantes, llevarlos al comicio, para que de este comicio surja la representación. Pero una ley no debe preocuparse de los partidos. Ella obrará ó nó sobre estos; allá lo veremos! De lo que debe preocuparse la ley es de lo fundamental, que es el voto del pueblo. Y si la constitución en ninguna de su cláusulas, ni directa ni indirectamente, habla de partidos ¿á qué entonces este afán de dictar una ley para los partidos? Lo que la constitución impone como deber al congreso es el dictar una ley electoral para el pueblo de la nación. Ni puede el congreso dictarla para los partidos, porque estos son algo contingente, algo transitorio: se forman y se desvanecen muchas veces sin que sepamos las causas; muchas veces son simples simpatías personales las que les dan nacimiento; otras veces causas accidentales son las que les dan origen; pero de todas maneras, la vida de los partidos es más ó menos efímera; y entonces ¿por qué se ha de dictar una ley que quite este derecho de votar que se ha concedido al elector, para pasarlo al comiéndolo á los partidos? ¿A quién damos esta arma de la nueva ley? No lo sabemos. Los partidos de hoy no serán los de mañana, ni sabemos que será de ellos.

Yo no quiero entrar al terreno que ya recorrió el señor diputado Argerich con la elocuencia que le caracteriza, al hablar de los partidos orgánicos, históricos; pero si diré que la Unión americana solamente respiró el día que Jefferson ante el congreso dijo: Aquí todos somos republicanos y todos somos federalistas. (*Muy bien!*)

Se ha dicho, finalmente, que hay que temer que en el porvenir se rebaje el nivel de la honorable cámara. No sé si el sentimiento de la cámara será que su nivel actual es más bajo que el que antes ha tenido. Me parece también que por mucha que sea nuestra presunción no podríamos decir que nuestro nivel ha sido superior al nivel de la cámara norteamericana ó al de la cámara de los comunes que se constituyen por el voto uninominal. Entonces, si no hemos de halagar nuestra vanidad aquí en familia, en pequeño comité, procuremos examinar las cosas un poco de cerca y veamos la verdad que hay en esa afirmación, es decir, la posibilidad de que esos temores

se realicen—temores patrióticos, si se quiere, pero que yo creo están muy lejos de realizarse.

Lo que rebaja las asambleas no es el voto uninominal que ha regido durante varios siglos en Inglaterra y que en Estados Unidos rige desde el año 1842, por disposición legislativa. Si fuera cierto que rebajara la representación nacional, aquellos países tendrían actualmente una representación que sería imposible: la hez de la representación. Pero no hay tal cosa. Lo que rebaja la dignidad y el nivel de la cámara es el sistema de la lista, que procede por la selección regresiva á que me he referido. Y podría citar las palabras de un autor contemporáneo distinguidísimo, Ostrogowsky, quien en su obra fundamental sobre la organización de los partidos políticos dice: «El sistema de la representación exclusiva de las mayorías por lista, sistema inicuo y brutal,—eso va por cuenta del autor,—que acuerda todo el poder á la mitad más uno de los votantes, aplasta las minorías reduciéndolas á una especie de esclavitud política, vicia el régimen representativo en sus fundamentos y siembra fatalmente la desmoralización y la corrupción en la vida pública».

Y Zanardelli, ese gran hombre público italiano en una relación ante la cámara, decía: «Tímidamente se propuso entonces—1872—el escrutinio de lista por provincias, con el cual algunos electores habían nombrado dos diputados y otros más, hasta un máximo de veinte». Ese es nuestro caso. Y agrega: «Esto sería la más graciosa máquina que jamás se haya podido inventar para falsear la voluntad nacional».

Yo no voy á citar casos personales porque no es necesario: pero si voy á hacer referencia á uno respecto del cual sé que la mayoría de la comisión me dará completa y cumplida razón. Se trata del primer magistrado de la nación. Diputado el año 60, ha estado apartado de los comicios durante largos años por el sistema de la lista, á pesar de tratarse de un ciudadano digno de sentarse en esta cámara.

Sr. Leguizamón—El año 80 estaba en el congreso y presidía la honorable cámara de que hoy forma parte el señor diputado.

Sr. Oliver—Quiere decir, entonces, que serán veinte años; y si ha venido á la cámara ha sido en virtud del acuerdo; no porque haya sido votado direc-

tamente por ningún partido. El partido nacional dió ese gaje al partido opositor para evitarse dificultades mayores.

Sr. Argerich—El doctor Quintana no vino aquí como gaje de nadie, sino para honor del parlamento y del país! (*¡Muy bien!*)

Sr. Oliver—Para hacer frases, estamos de acuerdo.

Sr. Argerich—Yo no hago frases, señor diputado. Lo que no quiere decir que acaso hubiese deseado que hiciese alguna el señor diputado.

Sr. Oliver—Me parece que más que las frases valen las ideas.

El sistema de la lista, que tiene estas consecuencias, produce además esta otra que hemos visto y palpado: la abstención, que ha sido declarada hasta como norma de un partido político; el alejamiento del elector del atrio, porque no queda más recurso: ó se vota por una lista en la cual no se ha tenido intervención, para evitar tal vez el triunfo de otra lista peor, ó se abstienen lisa y llanamente. Este sistema es, pues, el que nos lleva á la abstención, como ha sucedido en todos los países. Inmediatamente que el sistema de lista es abandonado para volver al sistema uninominal, podríamos decir que como en la columna termométrica sube el número de electores. Aquí lo hemos visto.

Este sistema uninominal ha tenido, como todos sabemos, el apoyo de los primeros hombres públicos del país. Me parece que éste es un punto muy digno de tenerse en consideración por lo que él significa. Obsérvense los nombres: Sarmiento, Avellaneda, Vélez...

—El señor diputado Lucero, habla en voz baja al orador que le contesta:

...No quiero hablar de ellos por ahora.

Estrada, del Valle, Alem... habremos solamente de los muertos.

Sr. Lucero—...Leguizamón, Achával Rodríguez...

Sr. Oliver—Perfectamente, Leguizamón, Achával Rodríguez...

Sr. Lucero—... y Gallo, etc., etc.

Sr. Oliver—Y bien ¿qué significan esos nombres? ¿Acaso se encuentra entre ellos alguno que no estuviera completamente animado del espíritu nacional? ¿No han sido ellos precisamente los que lo han afirmado, y lo

que les ha dado la mayor consideración,—no el espíritu de antagonismo de una provincia con otra, no los intereses del norte con el sur, sino ese espíritu nacional que ha querido hacer de toda la nación un solo indivisible, del pueblo de las provincias, uno, sin distinción absolutamente de intereses de ninguna clase, el interés del país, uno y solidario?

No se encontrará en todos los que han sostenido este sistema uno solo que no haya estado dentro de esta corriente de ideas que es la salvadora, dada la constitución que nos rige, y á la que debemos la existencia de la nación.

Y este sistema ha tenido además... ¿por qué no he de hablar de los vivos, desde que me puedo considerar separado de las influencias partidistas ó de círculo?—este sistema digo, ha tenido además todo el concurso del presidente Roca, todo el concurso de Pellegrini en el gobierno y fuera de él, y estos también se encuentran dentro de la misma corriente, de la misma tendencia que ha señalado un rumbo á la política nacional. Debe creerse entonces que algún pensamiento llevan y no una simple cuestión de procedimiento electoral.

No citaré muchos países extranjeros para no incurrir en repeticiones de lo que se ha dicho: pero esta ley sobre sistema uninominal, ha dado la vuelta al mundo, adoptándola las últimas constituciones que se acaban de dictar en 1902. La de Virginia, la de Nueva Zelanda.

Es un principio que está surgiendo en todas partes.

Pero cuando oí al señor diputado, con facilidad de palabra, con su gran talento que me complazco en reconocer, citar el caso de Bélgica, me parecía tener por delante un cuadro chino, uno de esos cuadros en que el último término, los detalles lejanos se confunden con los del primer término...

¡La Belgica traída aquí como antecedente constitucional, en esta interpretación legislativa!

Pero el señor diputado nos hacía un gran argumento...

Sr. Lucero—No he sido yo el que trajo ese ejemplo...

Sr. Oliver—Pero una gran parte de su discurso se refirió al caso de Bélgica y trató de explicarlo en todos sus detalles.

La Bélgica cabe perfectamente den-

Julio 15 de 1905

CAMARA DE DIPUTADOS

11.ª sesión ordinaria

tro de la provincia de Tucumán. Es un país en donde es indiferente que la elección sea por distrito, sea por voto uninominal, desde el momento que se trata de un país completamente reducido. La Bélgica, por otra parte, tiene el sistema monárquico de gobierno, el sistema parlamentario, y una porción de instituciones que nosotros no tenemos. ¿Por qué se va á buscar el ejemplo de Bélgica, que no hemos oído citar á ningún constitucionalista los que hemos estado en la escuela.

Sr. Lucero—Esa pregunta va dirigida al señor diputado Vedia. (*Risas*).

Sr. Oliver—¿Por qué se trae también el ejemplo de la Suiza? Suiza tiene todos los sistemas: allí existe el voto uninominal, el voto plural, el voto de la lista concurrente; pero aun tratándose de Bélgica, no es completamente exacto que ese país tenga el sistema que se le atribuye. Ese país tiene un sistema mixto, una combinación un poco alambicada, parecida á la del sistema de la provincia de Buenos Aires.

Entonces, señor, yo no encuentro motivo para los patrióticos temores que se insinúan en el mensaje. Me parece, por otra parte, que la constitucionalidad de esta ley está perfectamente establecida. Y si esto es así, ¿para qué se nos trae, señor, esta cuestión al parlamento?

Me parece que hay así como una falta de táctica gubernamental; tal vez no ha habido ningún congreso que, á pesar de proceder sus diputados de estos diferentes colores, que da el sistema uninominal, haya tenido mejor buena voluntad hacia el gobierno. Todos empeñados en la tarea, procurando ayudarlo en sus iniciativas, procurando colaborar en ellas, dispuestos, en una palabra, á que produjera el máximo de su esfuerzo administrativo. ¿Para qué se viene, entonces, á perturbar esta tendencia con una cuestión puramente de carácter político, que yo no diré que tenga propósitos políticos especiales, manifiestos personales, pero que en definitiva se presenta en las vísperas de una elección, y se podría llegar á suponer, por los que no conocieran el criterio de los señores diputados, que se van buscando intereses políticos.

Un señor diputado—¿Qué esperanza!

Sr. Lucero—Vamos á hacer versos con la reforma.

Sr. Oliver—Tal vez se me dirá que la ley anterior también surgió en esta

forma. Pero ¿cuánta diferencia había! Entonces era un sol en el ocaso y poco podía influir. Por otra parte, quebraba ese gobierno, en sus manos, esto que ha sido siempre un instrumento para los gobiernos, á fin de poder extenderse dentro de las asambleas legislativas, nacionales ó provinciales; esto que ha sido siempre un instrumento de dominio y de exclusión de los partidos populares. Ese gobierno no podía con esta ley defender ningún interés absolutamente, porque lo que darían las circunscripciones, era algo que no se sabía. Mientras que ahora se trata de un gobierno que surge, y se trata de una ley que vuelve á poner en sus manos toda esta responsabilidad más que ventaja, de tener que afrontar una elección por el sistema de lista.

Yo no he visto en el mensaje sino altos propósitos, propósitos desinteresados, y podemos decir casi más de carácter científico que otra cosa. Pero las palabras del señor ministro, que francamente deseo no interpreten la opinión del señor presidente de la república, me vienen á demostrar que no es tan científica la base de la reforma, sino que se procura satisfacer necesidades de algunos señores diputados,—me refiero á los términos expresos del señor ministro. «Se ha preocupado especialmente de la opinión dominante en el seno de esta honorable cámara, y hasta donde es admisible y posible la presunción sobre la manera de considerar este asunto por los señores diputados, él ha creído (el señor presidente) que satisfacía una necesidad política de la mayoría» ¿del país? nó; ¿de los partidos? no; de la mayoría de la cámara.

Entonces, yo me digo: ¿con qué prestigio puede nacer esta ley, que no viene á salvar los intereses del país, llevar el voto al pueblo sino á satisfacer los intereses de la mayoría?

La mayoría es algo movable...

Sr. Castro—Representa la mayoría del pueblo argentino.

¡Pues es poco venir á satisfacerla!

Sr. Oliver—Tenemos, entonces, que por expresa manifestación del señor ministro, esta ley no es una ley sino de ocasión, que viene á satisfacer las necesidades de una mayoría del momento, que desinteresadamente se adjudica el ser la mayoría del pueblo argentino. El pueblo argentino responderá oportunamente.

Sr. Castro—No hay interés en ello; hay verdad constitucional.

Sr. Iriondo—¿Y la verdad de hace dos años?

Sr. Castro—¿A cuál se refiere?

Sr. Iriondo—A la reforma anterior. *(Risas)*.

Sr. Castro—Lo que era verdad ayer, puede ser una mentira hoy. Hay que seguir la evolución de los partidos y el movimiento de las ideas; y no afeerrarse como un imbécil á lo que se creyó cuando era niño, después que llega á viejo. *(Risas)*.

Sr. Oliver—El señor miembro informante, ya no de acuerdo con el señor ministro, atribuye á otros propósitos la ley, y dice: se están formando coaliciones contra el actual gobierno—cosa que yo ignoraba.

Sr. Castro—Es cierto y muy grave.

Sr. Oliver—Si es cierto, no soy parte en ellas.

Y es necesario, decía, abrirles la puerta de los comicios con el sistema de la lista.

Es muy curioso: esos partidos ó fracciones de partidos no quieren ni reclaman que se les abra esa puerta, están conformes con el sistema actual. Nó, señor, dicen los partidos: no queremos la nueva ley. Y sin embargo, á todo trance se les quiere proteger, abriéndoles esa puerta.

Sr. Uriburu (F.)—¿Dónde están esas manifestaciones de los partidos?

Sr. Oliver—Me refiero á las opiniones del señor diputado Lucero.

Sr. Lucero—Yo me remito á la pregunta del señor diputado Uriburu.

Sr. Uriburu (F.)—¿Dónde está esa manifestación en representación de esa coalición?

Sr. Iriondo—Individualmente no se habla nunca en cuestiones políticas. Todas nuestras opiniones son solidarias dentro de la agrupación á que pertenecemos.

Sr. Uriburu (F.)—No sería éste el caso, porque el partido político á que pertenece el señor diputado, conjuntamente con los demás partidos de la coalición, no han manifestado por documento ni acto público alguno, como programa de esa coalición la reforma electoral.

Sr. Oliver—Se ha esgrimido contra esta ley un argumento, que indudablemente produce su efecto é impresiona y es el de la venalidad. Pero en esto de la venalidad, debe tenerse presente que

se exagera mucho por los mismos interesados en ella. Es curioso que los mismos candidatos son los primeros que se afanan en decir que han hecho muchos gastos. ¿Por qué? Por esas pequeñas combinaciones de comité para evitar los excesos de los partidarios, para darse mayor importancia y tal vez para alejar concurrentes.

Pero no es tanta la venalidad; y puede observarse este hecho:—me refiero á esta capital que es donde he actuado—todo el que se ha sentido capaz de vender su voto, lo ha hecho en esta capital, no ha habido ninguno de esos individuos sin conciencia que se haya quedado en su casa; todos han corrido á la calle á vender su voto. Pero en cambio, la votación de todos aquellos que no son venales no ha llegado al máximo, porque después de tantos años de no ejercitar las funciones electorales, ha habido muchos que no han creído en la eficacia de la ley y se han retraído. Y éstos, viendo la eficacia de la actual ley, viendo que un voto cualquiera puede decidir de la elección, estoy seguro que en lo sucesivo han de salir á la calle y votarán; y entonces la mayoría, que es la de los que no trafican con su voto, ha de ir á la elección y hará triunfar su candidato. Así, pues, la venalidad va á desaparecer por la mayor concurrencia en los comicios.

Por otra parte, no debe de atribuirse á la ley electoral actual la venalidad, porque es un mal de todos los sistemas. Siempre que el voto valga, será más ó menos objeto de tráfico. En todas las partes ha sido así. Entonces, dicese leyes, tómense medidas que impidan el tráfico del voto. Esa es la manera de proceder para evitar el mal, que no se puede atribuir sólo al sistema actual.

Yo creo que con mucha altura el señor presidente de la república ha dicho en su mensaje que la venalidad no se puede atribuir exclusivamente á este sistema.

Voy á terminar, señor presidente.

Nos hemos dado una ley electoral después de una lucha de muchos años; hace poco tiempo que está en aplicación; se ha renovado la mitad de la cámara de acuerdo con ella, ¿es de buen gobierno el venir á modificarla inmediatamente, porque haya presentado ciertas dificultades?

¿No sería mejor tratar de corregir,

por el momento, esas dificultades y esperar á que la ley produzca todos sus resultados, para que entonces la cámara pudiera aplicar el remedio conveniente?

Yo creo que este apresuramiento, que es puramente de nuestra raza, es inconveniente. Esto no se encuentra nunca en las leyes de países más serios en materia de gobierno, donde se esperan con paciencia, los resultados de una ley, y esto ha sucedido por ejemplo en Inglaterra á pesar de que se trataba de circunscripciones tan pequeñas que en algunos burgos la mesa estaba constituida por una sola persona, que era el elector.

Sr. Lucero—De modo que el sistema no se derogaba nunca.

Sr. Oliver—Lo que prueba que en estas reformas se procede con un poco más de cautela. Casimiro Perier, el expresidente de la república francesa, en su prólogo á la notable obra de Todd, dice esto, que nos es perfectamente aplicable: «La impaciencia política turba el presente y compromete el porvenir. Nos asombramos y nos impacientamos si al día siguiente de ensayar un sistema no lo vemos funcionar como un perfecto mecanismo y rompemos la máquina antes de tomarnos el tiempo necesario para hacerla marchar.» (*Muy bien!*)

Esto es perfectamente exacto y parece dicho para nosotros, porque en definitiva somos más ó menos la misma raza. Entonces yo desearía que pensáramos un poco antes de producir esta reforma que puede traer trastornos al país; yo desearía que buscáramos un medio conciliatorio que alejara todas las alarmas que nos amenazan, y por el cual tengan representación las minorías; hágase cualquier reforma, dentro de la constitución; dése una representación á la minoría, aun de esos partidos rojos, que son rojos porque no llegan al gobierno, pero que una vez que vienen aquí se humanizan, y procuran compartir con nosotros la tarea de legislar para el bienestar del país.

Termino asociándome al pensamiento general de hacer algo benéfico para el país pidiendo que se sostenga por los miembros de la mayoría de la comisión alguna reforma que salve esto que es hoy una conquista universal: la representación de las minorías. (*Muy bien! Aplausos*).

Sr. Lucero—Pido la palabra.

La resolución adoptada ayer por la

honorable cámara y el cansancio visible de los señores diputados, revelan que ha llegado el momento de votar. Por este motivo limitaré los deberes de la réplica,—sin la cual no habría discusión—á presentar alguna salvedades sobre los discursos del señor diputado O'Farrell y de los otros, posteriores al elocuentísimo del señor diputado Carbó, cuya palabra de gran estilo ha dado realce á esta importante deliberación.

El señor diputado O'Farrell ha atribuido las revoluciones á la lista, aduciendo su argumentación sobre las elecciones verificadas en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, precisamente donde han ocurrido menos revoluciones.

Parece incompleto el desenvolvimiento histórico que ha dado á su prueba el distinguido señor diputado por la capital. Por la premura no me detendré sobre ella, sino para recordar que estos movimientos subversivos que llamamos revoluciones y que son tan característicos de la política sudamericana, obedecen á causas múltiples y variadas; y que sería de tan poca lógica radicarlos en el sistema electoral de la lista, como adjudicarlos al sistema electoral de la circunscripción.

En los últimos cinco años de la lista, no ha tenido lugar ninguna revolución, y en el primer año de vigencia del sistema uninominal, se han producido tres movimientos subversivos: la revolución de San Luis, el secuestro del gobernador Santillán y el vergonzoso pronunciamiento del 4 de febrero.

¿Acaso por estas coincidencias, podemos afirmar que la lista, en los últimos cinco años, había dejado de producir revoluciones y que la circunscripción ha principiado á producirlas?

No, señor, no podríamos afirmarlo sin raciocinar como los curanderos, que reducen todas las enfermedades á una sola causa, la que perciben, y todas las medicaciones á una sola panacea, la que expenden. Lo digo sin pretender desdorar la profesión de los impíricos, tan respetable como cualquier otro trabajo.

El señor diputado Balestra nos ha sorprendido con el desenlace que ha determinado sobre la cuestión constitucional, asegurando que esa cuestión es cosa juzgada por la sanción anterior de la honorable cámara.

Esta opinión, de tan distinguido jurisconsulto, es una novedad...

Sr. Balestra—Simple abogado, señor diputado.

Sr. Lucero—Esta opinión del señor diputado, es una novedad. Yo no sabía que la sanción de la honorable cámara fuera como el fallo de la Suprema corte, suficiente para hacer cosa juzgada en materia constitucional. Lo que si tengo la seguridad completa de que si cualquier ciudadano elector de la capital de la república se presenta ante los jueces ó la Suprema corte á reclamar su derecho de concurrir á las elecciones en la circunscripción 13, cuyos comicios se están preparando, los jueces y la suprema corte atenderán en justicia el reclamo del elector. Este no les dirigirá por cierto á los jueces ó á la suprema corte una cuestión sobre la composición de la honorable cámara ó sobre la existencia institucional del poder ejecutivo, cuestión que el señor diputado ha forjado, para darse el placer de ganarla de antemano, sino que les presentará esta otra cuestión diferente, sobre la cual estamos discutiendo desde el principio de la deliberación: de si tiene ó no tiene derecho de concurrir á todas las elecciones dentro del distrito constitucional.

Sr. Balestra—Permítame el señor diputado...

Creo que es un completo error, que no es difícil en el que, sabiendo mucho derecho constitucional, como el señor diputado, no tiene el criterio profesional.

Sr. Lucero—Puede ser, señor diputado.

Sr. Balestra—Si un elector se presenta á una mesa á votar, y ésta lo rechaza porque no puede votar en esta elección y se presenta reclamando ante la justicia federal, ésta le dirá «Usted ha debido hacer constar su protesta en el acto de la elección, á fin de que llegara al congreso, pues de ese acto el único juez es el congreso de la nación. (*Muy bien!*)»

Esto es lo que ha de decirle porque en ninguna parte el congreso es un cuerpo que pueda depender en cuanto á su formación, de otro poder. El congreso es aún más: es el cuerpo engendrador de los otros poderes; se mueve él solo, depende de él solo, es una encarnación directa de la soberanía; y no se puede sostener, sin evidente desconocimiento de los principios que rigen esta materia, que esté supeditado á las resoluciones de la Suprema corte, en lo relativo á su organización y que ésta tenga la omni-

potencia suficiente para decir, aunque sea implícitamente, en nombre de una interpretación de la ley, que el congreso ó la presidencia de la república están mal constituidos. Se llegaría á sancionar de esta manera la teoría del golpe de estado, ejercitado por los tribunales de justicia del país.

Por otra parte, le advierto al señor diputado que éste no es un caso de corte suprema, éste es un caso de juzgado federal. La corte no entiende originariamente, señor diputado—y permítame que le recuerde estas nociones—sino en los casos....

Sr. Lucero—Lo que digo es que á los jueces...

Sr. Balestra—Permítame el señor diputado. Después me replicará, si puede. (*Risas*).

La Suprema corte no entiende originariamente sino en los casos de ministros diplomáticos, cónsules y enviados extranjeros y en aquellos en que una provincia sea parte. Fuera de estos casos, los demás son jueces de primera instancia, ó sea jueces de sección. De manera que bastaría que no se apelara la resolución del juez de sección, para que la existencia del congreso—fijense que enormidad, señores diputados!—y de la presidencia de la República pudiera ser destruida por una modesta sentencia que declarara la falta de autoridad de los poderes públicos, derivada de la inconstitucionalidad de la ley en cuya virtud y por cuyos procedimientos se los eligió. Y es sobre eso sobre lo que indispensablemente tendría que recaer toda sentencia sobre inconstitucionalidad de la ley electoral.

Pero es indudable que los constituyentes, al establecer que la Suprema corte juzga de las causas en que la ley la autoriza, han entendido que eran las causas civiles y criminales. ¿Y podían entender, y no decirlo, que fuera una facultad originaria de la Suprema corte juzgar implícitamente del origen constitucional del poder que engendraría á todos los demás poderes en la República?

Sr. Carbó—Pero esa es la consecuencia inmediata á que llegan los que sostienen la teoría del señor diputado.

Sr. Balestra—Yo no respondo sino de las teorías que sostengo yo, y que expongo bajo mi responsabilidad profesional, ante los notables abogados, que forman parte de la cámara, de los cuales todavía no he escuchado una respuesta adversa ni una duda siquiera.

Sr. Carbó—Pero eso no destruye el argumento.

Sr. Balestra—Con la agravante que estoy sosteniendo la estabilidad de los poderes, que soy más papista que el papa, y que sin embargo me están atacando los que quieren sostener al poder ejecutivo negándole la partida de bautismo de legitimidad que el país y este congreso le han reconocido. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Carbó—Es al revés: si precisamente hemos sostenido que no podría invalidarse!

Sr. Iriondo—Pero se declara inconstitucional...

Sr. Presidente—Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Balestra—Pido mil disculpas al señor diputado y al señor presidente por haber usado de la palabra sin su previo permiso.

Sr. Lucero—Estoy muy agradecido por la lección...

Sr. Balestra—No he pretendido dar lección alguna al señor diputado, aunque en materia de derecho me creo en la misma situación que el señor diputado en materia de medicina.

Sr. Lucero—Entonces continúo.

Sr. Balestra—Son tan elementales!...

Sr. Lucero—Ciertamente son elementales; pero no veo en qué contrarían las opiniones y los antecedentes que acabo de presentar á la honorable cámara. Yo he planteado precisamente el caso de que el elector vaya á los jueces y á la suprema corte, suponiendo que después de los jueces recurrirá á la suprema corte, si no estuviera satisfecho del fallo inferior.

En cuanto á las funciones del congreso, me permitiré observar que, por grande que sea la autoridad jurídica del señor diputado, no me parece que el congreso sea soberano, ni tenga control la Suprema corte sobre sus actos sino en cuanto concierne á la constitucionalidad de las leyes.

Sr. Balestra—Sobre su composición política, no.

Sr. Lucero—De ninguna manera, sobre su composición política, y en eso estoy de acuerdo con el señor diputado.

Sr. Balestra—Ah! me alegro.

Sr. Lucero—De ninguna manera puede haber recurso de inconstitucionalidad con motivo de la composición del congreso, ni sobre la existencia incons-

titucional del presidente de la república. El recurso á que me he referido es el del ciudadano, que reclamara de su derecho de votar en todas las elecciones del distrito constitucional. Es lo que he dicho y repito, agradeciéndole otra vez al señor diputado la prueba que nos ha dado de sus conocimientos en esta materia.

Sr. Balestra—No hay de qué. Me he limitado á defender mis opiniones, atacadas por el señor diputado.

Sr. Lucero—En seguida el señor diputado nos ha declarado en nombre de su partido, que no sabía hubiera celebrado una convención para encargarlo de esta misión, que no se han firmado pactos de fines políticos con los demás, sino de fines electorales.

Sr. Balestra—¡Cómo voy á hacer esa confusión! ¡Si política y elecciones son siempre política! (*Risas*).

Sr. Lucero—Pero según el señor diputado, —y si es necesario apelo al «Diario de sesiones», —las coaliciones actuales tienen fines electorales en la capital y políticos en la provincia. Creo que repito las palabras textuales del señor diputado.

Sr. Balestra—Ahora, es cierto.

Sr. Lucero—Ahora y siempre ha sido cierto, porque tenga la seguridad el señor diputado de que no he de tergiversar sus palabras.

Sr. Balestra—No digo semejante cosa: pero creo que se equivocaba el señor diputado.

Sr. Lucero—No, señor, no estaba equivocado.

Sr. Balestra—Le voy á decir el concepto de mis palabras, porque ellas podrían no espresarlo claramente. Dije que las coaliciones tienen objetos locales, que tienen fines de política local que no se refieren de ninguna manera á los fines de política general del presidente de la república expuestas en su programa.

Sr. Lucero—¡Encantado de la calificación del señor diputado!

Sr. Balestra—¡No es como para encantarse! (*Risas*).

Sr. Lucero—Porque una coalición electoral que no tiene fines políticos, necesariamente debe entrar en la definición de la política de los acuerdos, que hacía el señor diputado Varela Ortiz en una de las últimas sesiones, cuando consideraba que esta política era un mero reparto de posiciones. No me cuesta mucho demostrarlo, desde el mo-

mento en que los señores coaligados van á llamar á sus electores, sin exponerles en la convocatoria cuáles son sus fines políticos, cuál es su programa de gobierno. Quiere decir que los electores no han de tener fines políticos, no han de votar programas políticos, y que solamente ellos, los señores coaligados, han de tener tales fines y tales programas para que, cuando hayan obtenido la representación hagan política gubernativa ó política opositora, según convenga á los firmes principios y puros propósitos que sobrevengan, que en cuanto á los principios y propósitos de los electores, los señores coaligados reconocen que los electores no necesitan tenerlos para darles su investidura.

Sr. Balestra—Eso es aplicable á todos los partidos.

Sr. Luro—No toca eso á la circunscripción; y el señor diputado, después de haber dicho que la válvula...

Sr. Lucero—Yo no he hablado de válvula. (*Risas*.)

Sr. Luro—...que la válvula del sistema de la lista era la coalición ó el acuerdo, que trae á los hombres de la oposición á los puestos representativos, viene ahora á desconocer la importancia que tienen esos acuerdos negando que se inspiren en la verdadera fuente de donde emanan, que es el pueblo. Quiere decir que son ligas adventicias, completamente destituidas de esa eficacia que les da la inspiración popular.

Sr. Vedía—Hay que salvar á los electores...

Sr. Presidente—(*Agitando la campanilla*)—El señor diputado por Tucumán tiene la palabra.

—Varios señores diputados hablan á un mismo tiempo dirigiéndose al orador.

Sr. Lacero—Señor presidente ¿tengo el uso de la palabra? No puedo contestar á un mismo tiempo á todos los señores diputados.

Sr. Presidente—El señor diputado tiene la palabra.

Sr. Balestra—Conmigo no vale la pena de detenerse.

Sr. Lucero—Tengo que detenerme con todos; pero ruego al señor presidente que me permita contestar la interrupción del señor diputado Luro.

Y se la contesto, siempre por intermedio del señor presidente, que no con-

traría en nada la declaración que hago en este momento, la manera según la cual hemos considerado el acuerdo cuando no tiene sino fines electorales y no fines políticos que deben declararse de antemano á los electores. Porque no son solamente los jefes de los partidos que se coaligan los que tienen derecho de abrigar fines políticos; son ante todo, principal y fundamentalmente los electores.

Sr. Luro—Siempre caemos en lo monstruoso de la lista.

Sr. Lucero—Ahora, en cuanto al partido autonomista nacional, como tampoco se ha reunido en convención, no puedo hacer declaraciones en su nombre; pero puedo manifestar que el partido gobernante, cuyo título buscaba el señor diputado por Corrientes, está formado principalmente por el partido nacional.

En cuanto á los adversarios en esta cámara, llamo la atención que, para oponerse al despacho de la comisión, reniegan de los acuerdos, de que ellos han participado. Yo no quiero, por la premura del tiempo, detenerme á examinar el sentimiento de extrañeza que causa esta argumentación de los señores diputados, y me limito simplemente á dejarla señalada como una razón contraria á sus opiniones.

En lo que toca al general Roca, me complacen infinitamente las opiniones del distinguido diputado por Corrientes, doctor Balestra. Pero debo advertir que yo no he imputado al general Roca la disolución de los partidos, sino á una acción propia del sistema electoral vigente; y que he conjeturado, nada más, que la situación política producida por este sistema, ha sido favorable al triunfo de la fórmula proclamada por la convención electoral de octubre.

Finalmente, respecto á la política presidencial, hacia cuya cooperación yo entiendo que estamos comprometidos los que hemos sostenido la candidatura victoriosa, porque el presidente de la república no ha quebrantado con ninguno de sus actos sus declaraciones de candidato, tratándose de esta política, sin ahuecar la voz ni levantar el dedo, yo me permito decirle al señor diputado, me permito asegurárselo al señor diputado y á la honorable cámara, que bajo tres conceptos se deben entender estas manifestaciones: primero, que yo no me he dirigido al señor diputado, que ha sido adversario de esa

candidatura; segundo, que en esta cuestión de la reforma electoral yo estoy sosteniendo ideas anteriores á las declaraciones presidenciales; y tercero, que yo no he estado nunca marcado por ningún *ismo*; que yo no he sido juarista, y que no he atravesado la situación, terrible que el señor diputado temía!

Sr. Balestra—Y el señor ministro. Estábamos los dos en la cámara. (*Risas*).

Sr. Lucero — Me es completamente indiferente.

Sr. Balestra—Y muchos otros diputados tan patriotas y sinceros como el señor diputado...

Sr. Lucero—Yo estoy defendiendo ahora mi situación personal, y diré de una vez por todas sobre este asunto, que ha provocado más de una alusión de los señores diputados, que me repugnan en absoluto todos los *ismos*, que signifiquen sumisión de carácter, como lo prueba el honor de mi conducta irrepachable. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Ahora, refiriéndome, señor presidente, á los discursos de los señores diputados Peluffo y Oliver, no tendría que repetir los mismos argumentos, porque se hayan repetido las mismas objeciones. Pero no quiero abusar por más tiempo de la atención de la honorable cámara, ni quiero tampoco entrar en la discusión de las acepciones del término *absoluto*, en la manera absoluta que solamente pertenece á la metafísica ó á la teología, donde ya no es hora que sigamos debatiendo.

Y para concluir, en cuanto al señor diputado Argerich, como ya he distraído demasiado la atención de la honorable cámara y me siento un poco fatigado, me alegro de verlo ocupar de nuevo su asiento en esta cámara, deplorando solo que haya alzado su palabra tan comprimida de bondad y de prestigio, para defender un proyecto que no está en discusión, sin pronunciarse sobre lo que él ha tenido á bien llamar el problema mínimo, el tema litúrgico de los sistemas electorales, sobre los cuales la cámara está por resolver su sanción.

He dicho. (*¡Muy bien!*)

Sr. Latorre—Pido la palabra.

No tengo el propósito de hacer discurso. Después de la brillante y fecunda discusión que tuvo lugar en esta cámara en 1903, que produjo como resultado lógico la ley electoral vigente que tantos entusiasmos y esperanzas de reacción provocó en el país, después

de la controversia oportuna y patriótica de la prensa nacional; y después finalmente de los numerosos y eruditos discursos que hemos oído durante esta discusión, considero que el tema bajo el punto de vista doctrinario está agotado, y no seré yo quien insista y trate de profundizar más la materia, á riesgo de abusar de la benevolencia y de la hidalguía de la honorable cámara.

Pero en medio de ese foco luminoso que se ha formado en virtud de la discusión en general, se perciben ciertos lineamientos, se perciben ciertos perfiles que caracterizan de un modo categórico y concluyente las fases que constituyen el alma, diremos así, y los caracteres sobresalientes y de relieve que tiene cada sistema electoral de los que están en discusión; el sistema uninominal y el sistema de distrito; y no enumero el sistema de la representación de las minorías, que es el más conforme con los principios de bondad científica y positiva, porque creo más oportuno y procedente que sea presentado en cualquier momento bajo la forma de un proyecto especial de reforma de la constitución.

Para cumplir mi propósito, entonces, de no abusar de la paciencia de la cámara, me limitaré á hacer una simple enumeración de los caracteres que constituyen la faz saliente de cada sistema; y una vez concluida esa enumeración, podremos apreciar cual es el que conviene más adoptar.

Imparcialmente juzgado el sistema de lista, dificulta la acción popular y facilita la intervención oficial. El mismo provoca el fraude, y finalmente establece la uniformidad parlamentaria. Estos son los caracteres, los rasgos distintivos, diremos así, de ese sistema.

En cuanto al sistema de distrito, desde luego se ha comprobado, de una manera evidente, que no adolece de esas tachas, sinó, por lo contrario, que está perfectamente encuadrado dentro de los términos y del espíritu de la constitución, lo que es más importante y de más alta conveniencia en nuestra forma de gobierno.

En segundo lugar, el sistema de distrito vincula más al elector con el candidato; estimula más y fomenta la intervención popular; permite el control directo en la masa popular y facilita la representación de todas las opiniones y de todos los intereses.

En esta enumeración que es tan rápida y que no puede ser más sintética,

apenas me detendré un momento á apreciar las ventajas que para esta última condición aporta el sistema de distrito; es decir, la representación proporcional que facilita el sistema de distrito para que se reflejen los intereses y las ideas de todos los partidos.

Yo pienso, señor, que cuando se trata de una ley electoral ó lo que es lo mismo, de una ley en la cual se va á consignar todas aquellas circunstancias, todas aquellas condiciones para lograr el voto genuino del ciudadano, la expresión de la voluntad del elemento representado, como es el pueblo, toda otra consideración cede ante la gran condición de la sinceridad, de la verdad, de la voluntad genuina, del deseo y de la sinceridad manifestada por el pueblo.

La formación de los partidos, señor, la formación de toda agrupación con fines políticos permanentes ó accidentales; los diferentes sistemas de elección, el de la minoría, el de la lista y demás que se conocen en los textos y por la prédica de la prensa diaria ¿á qué responden? ¿Qué propósito tienen? ¿Qué buscan? Aproximar el elector á la verdad pura, á la expresión sincera y neta de sus aspiraciones, de sus propósitos.

Entonces, señor, tenemos que el mejor sistema.—y tratándose en este momento de dos sistemas concretos, el de lista y el de distrito,—el superior sistema de estos dos, será aquel que se refleje intérprete y patentice mejor la voluntad del elector.

¿Se podrá poner en duda, señor presidente que sea más palpitante, más evidente y de cuerpo entero, diremos así, el elector con todos sus anhelos, con todas sus aspiraciones, y si se quiere con todos sus errores, en el sistema de lista que en el sistema de distrito?

Me parece que no. El sistema de distrito es en el que va el propagandista á buscar el candidato, cualquiera que sea, en su hogar, donde se encuentre, al ciudadano para obtener su respuesta categórica, sin intermediarios, sin rodeos, sin los otros inconvenientes que tiene el sistema de lista.

Se dice, señor, como un argumento, que el sistema de distrito facilita y dilata el imperio de la venalidad y del cohecho.

Debo comenzar, señor presidente, por recordar que esta tacha que se opone al sistema del distrito, es aplicable también al sistema de la lista y á todos los

sistemas electorales imaginados y por inventar. Esto no está en el sistema, señor, sino en la condición humana; está en la condición del hombre poco escrupuloso, ya en el orden de la vida pública, de la vida social ó de la vida de familia. Y tenemos que todas las leyes, civiles, comerciales, políticas y criminales, siempre clasifican, siempre se hacen cargo y siempre ponen de manifiesto y tratan de dificultar el cohecho, reglamentando las penas para su castigo.

De esta lijera consideración, resulta que esta fea falta, que este bochornoso vicio de la venalidad, que es la subordinación de la conciencia, de la intención pura, honorable y decente al interés, se encuentra en todas las esferas de la vida humana, así en los tiempos antiguos como en los tiempos modernos, en los pueblos adelantados como en los pueblos atrasados, así en el viejo continente como en las nacionalidades del nuevo.

Entonces, no es un patrimonio del sistema al que se le imputa; y si pudiera haber algún grado de verdad en que le da más holgura ó que facilita más su ensanche, tendríamos entonces que sería muy corregible por medio de disposiciones reglamentarias, de las que, por el momento, se me ocurre una: el voto secreto. Entonces, ante la imposibilidad de conocer el voto del elector, en que sin duda expresa su simpatía, el presunto corruptor, el presunto alterador, diremos así del voto, en el orden de la moralidad, se abstendrá de entregar su dinero, porque seguramente correría el riesgo de hacer un mal negocio.

Pero admito, señor, por un momento, y supongo que con preferencia se produzca este inconveniente, este grave defecto del voto con el sistema del distrito. Se produce exactamente por el sistema el voto por lista. Desde hace treinta, cuarenta, cincuenta años, desde que existió nuestra vida política en embrión, y después orgánica, ha estado siempre en vigencia el voto de la lista, y eternamente, señor, se ha repetido en los comicios públicos, siempre se ha imputado á todos los partidos, cual más, cual menos, el defecto y el mal de la venalidad.

Entonces, pues, el sistema de la lista es susceptible de ser alterado, de ser entorpecido por esta fea tacha y gran des-

gracia en el orden de la moralidad pública: la venalidad y el cohecho.

Pero, señor: si el sistema de lista, según lo sostienen sus propagandistas y sus partidarios, no es tan propenso á fomentar la escuela de la corrupción política en el sentido que vamos recordando, lo es, en cambio, difundidor, sostenedor y gran perfeccionador de otro defecto, que para mí es mucho más grave que el que ligeramente he recordado, y es el vicio del oficialismo.

El vicio del oficialismo participa del defecto del cohecho y de la venalidad y participa de la intimidación, de la coacción sobre la moral, sobre la voluntad; cuando no basta el cohecho, el dinero, el incentivo pecuniario, se interpone la presión, la amenaza de tormentos, la amenaza de la persecución; en una palabra, altera, cohibe y hasta suprime completamente la libertad del ciudadano.

Al fin, señor, en la aplicación del cohecho, es forzoso reconocer, aparte de la fealdad de ese procedimiento, que hay vestigios de sentimiento, una condición de la personalidad, una base de libertad humana. Bien ó mal empleado, mal en este caso, pero en acción que vibra, centellea y vive, y se manifiesta con malos caracteres, con rostro repugnante, pero constata su personalidad. El hombre, el ciudadano que se vende ó que compra, es un hombre libre, es un ciudadano libre; mientras que en la forma del oficialismo, en el que particularmente predomina la coacción, la intimidación y la amenaza, se suprime casi por completo y de raíz la libertad del ciudadano, se le convierte en un ser pasivo, timorato en principio, y después en un ser completamente cero, que ante las perspectivas de peligros más ó menos serios, más ó menos permanentes sobre su persona, sobre sus intereses, y quizás sobre su misma libertad, acaba por transigir y mostrarse como un ente, como un ser enteramente complaciente, más allá de lo que su dignidad y sus deberes de ciudadano se lo permiten.

Es así como balanceando, estableciendo una ligera comparación de esos dos vicios, que afectan este sistema, el de la solicitud venal y el de la intromisión del oficialismo, de los poderes públicos ó de ciertos agentes del poder público, entre los dos males, yo opto, me quedo y transijo más bien con el primero y repugno y condeno en absoluto el segundo. Acepto el primero con

toda su fealdad, desaprobándolo y procurando que vayan sus autores á la cárcel y sufran todas las consecuencias de la ley penal, mientras que con el segundo no son pasibles de pena, por que, como he dicho hace un momento, el ser que por la intimidación pierde su libertad, pierde su conciencia de ciudadano, es una personalidad nula; no merece que se le llame ciudadano.

Pero decía, al comenzar á hacer uso de la palabra, que no me proponía descender á detalles, á argumentos, á repetir lo que mis honorables colegas han dicho con tanto brillo y con tanta suficiencia, que hace cuatro sesiones que nos tienen pendientes y absortos de sus labios, á mí en primer término. No es oportuno volver sobre ello. Creo que debo reducirme, á opinar que la cuestión, como se presenta, es inoportuna. Buena ó mala, la ley de los distritos existe; ayer se ha creado: comienza á dar su resultado; y repetiré lo que se ha dicho antes, que sus resultados han sido muy satisfactorios. Los miembros que han resultado de los distritos, que ocupan su asiento en esta cámara, no valen más, no pueden invocar que traigan un contingente moral é intelectual superior al de los que ya se encontraban en ella; pero sí, sin inmodestia, creo que pueden hermanarse y ser tan dignos y merecedores de las consideraciones públicas, como los colegas anteriores. El año 1903, se ha sancionado la ley, después de largas discusiones y de largas consideraciones en la prensa periódica. Se han aducido razones, argumentos y conceptos los más variados, y los más interesantes que se pueden adoptar hasta llegar al sistema de las circunscripciones, y después de un año, apenas, del primer ensayo y de la primera aplicación que se ha hecho de la ley, se propone su derogación para volver al sistema antiguo, decrépito y perfectamente reprobado de la lista.

Esto, señor, revela una vez más que nuestro pueblo es muy movedido, muy inconstante, que se deja llevar por las impresiones del momento, que tiene poca paciencia para perseverar y experimentar aquello en que la sociedad exige meditación y calma.

Una ley electoral, como ha dicho uno de nuestros distinguidos colegas en el curso de esta discusión, es todo el gobierno de una nación.

De ella parte, á ella vuelve, por ella existe, por ella se forman y se constituyen todos los poderes públicos de la

nación. El poder legislativo, compuesto por dos cámaras; el poder ejecutivo de un presidente y un ministerio, el poder judicial en la forma y condiciones que la constitución establece.

Entonces, pues, se requiere más meditación, más madurez y más calma, para darse cuenta de ella, para comprender cómo se la puede apreciar y para llegar a saber si realmente debe ser reformada.

¿Es suficiente experimentación un solo ensayo, una sola oportunidad, la de 1904 por la cual hemos venido á esta cámara la mitad de sus miembros, oportunidad que, por otra parte, no ha dado mal resultado? Absolutamente no. Entonces, corremos el riesgo de modificar una ley que puede presentar sus pequeños inconvenientes, pero que deben corregirse con el andar del tiempo y con la práctica misma, y estamos expuestos á sancionar una reforma á la ley del distrito para cuya primera aplicación ha creado todo un personal y por la que se han hecho trabajos más ó menos complicados para preparar la elección de 1904.

Y todo esto que importa una verdadera labor y un verdadero trabajo del gobierno y de la sociedad argentina, se trata de suprimir de una sola plumada, volviendo al sistema de lista é inutilizando de esta manera todos los sacrificios crecidos y desembolsos pecuniarios que el gobierno ha hecho.

Con la sanción de la ley vigente y con la revocación casi inmediata que se trata de hacer, nos vamos á encontrar en la duda para saber cuál de los congresos tuvo razón: si el congreso que la sancionó ó el congreso que está por modificarla ahora. Y aquí conviene recordar á propósito del cambio de opiniones, aquella circunstancia muy conocida de todo el mundo, del doctor Vélez Sarfield, que en cierta oportunidad manifestó una opinión sobre una materia dada, y poco tiempo después se le hacía notar que daba otra que no coincidía con aquella, á lo que contestaba que no era extraño, porque desde aquella oportunidad á esta, había adelantado é ilustrado más sus ideas. Esto mismo ocurre con el congreso actual. Ayer, fué la ley del distrito la que se sancionó, parece que deliberadamente, y es el congreso actual el que trata modificarla.

Es el caso de preguntar cuándo es-

tuvo el congreso en la razón y en la verdad.

Yo pienso sinceramente que ayer. Entonces, pues, yo creo, para concluir mi exposición, que el congreso obediendo, como un cuerpo compuesto de elementos sanos, intelectuales, serios, que debe ser más bien conservador, debe tomarse un poco de tiempo y dejar andar esta ley un espacio de cuatro ó cinco años, para que no se pueda decir respecto de ella lo que dijo el coronel Dorrego el año 26, cuando se urgía en la discusión y sanción de una ley en aquella asamblea: Esto debe llevarse como entierro de pobre, apresuradamente y sin cortejo fúnebre.

He dicho. (*Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Vedia—Pido la palabra.

Debo forzosamente empezar diciendo lo que han empezado diciendo, á su vez, todos los oradores, en la última parte de este debate; es decir, que el debate termina.

Lo siento profundamente, señor, porque confieso que á medida que la discusión avanzaba, iba cobrando nuevas esperanzas, en defensa de la doctrina que yo he contribuido á sostener.

Pero es fatal: *tout passe, tout casse, tout lasse*... hasta las ideas; y de las ideas se ha dicho que son como las nieves de las montañas: las que se funden, fertilizan los valles y son inmediatamente reemplazadas en las cumbres, por otras que quedan allí á la espera de nuevas fecundidades. (*Muy bien!*)

Yo creo, señor presidente, que la ley de 1902 ha sido fecunda; creo que estaba destinada á continuar siéndolo en el porvenir político de la nación, como creo que la lista, si viene, yermará de nuevo el campo de la vida cívica. Pero, señor, si ha llegado la hora de esa solución, que yo juzgo tan equivocada, creo que por lo menos podremos recogernos en la esperanza de que, bien pronto, si las circunstancias demostrasen que el error ha estado en la insistencia á favor de la lista, veremos reaparecer otra vez en el escenario político la circunscripción electoral.

Señor presidente: quedan dos ó tres puntos, que el miembro informante de la minoría, de la segunda minoría, diré para colocarme en mi verdadera posición, debe recoger antes de que este debate se cierre.

Es el primero el argumento político del señor diputado Lucero, en el que

Julio 15 de 1905

CÁMARA DE DIPUTADOS

11.ª sesión ordinaria

él se ha creído en el caso de insistir. Yo continúo considerándolo inadmisible; y me parece que con una pregunta — que no le dirijo, por cierto, — resolvería yo la situación de los hombres que, dentro de mi partido, sostenemos el régimen uninominal y combatimos el sistema de la lista: si el señor presidente de la república hubiera sido partidario de la elección uninominal, ¿cuál habría sido la actitud en esta cámara y en este momento del señor diputado Lucero? (*Muy bien!*)

Yo le hago el honor de suponer — y con esto no niego que las opiniones políticas en esta materia puedan amoldarse á las circunstancias, á la experiencia — yo le hago al señor diputado el honor, repito, de declarar ante la cámara, que su actitud habría sido la misma de hoy, tan valiente, y la misma de 1902. Entonces, pues, es justo que nos acojamos al mismo razonamiento y que nos sea dado sostener que dentro de las tendencias políticas del partido nacional, los que defendemos la circunscripción, estamos perfectamente, plenamente dentro de nuestro derecho, sin afectar ningún interés político propio ó conexo, cuando combatimos el grave error de la vuelta al sistema de la lista. (*Muy bien!*)

Despejado queda ese argumento y paso á otro recogido por el señor diputado Carbó en esa forma espontánea y brillante de su reconocida elocuencia...

Sr. Carbó—Muchas gracias!

Sr. Vedia—...el argumento que se refiere á los grandes conjuntos, á la necesidad de reunir las grandes masas de opinión; á la necesidad de mantener la lista, que es el choque de los altos ideales políticos, según se dice.

Señor presidente: habría en cierto modo, una incongruencia en desconocer á la masa popular los títulos ó la capacidad suficiente para resolver esta cuestión electoral dentro de cada circunscripción y acordársela en esa forma á la masa enorme que no se sabe cómo se forma, que no se sabe de dónde sale, que no se sabe á dónde va.

Las grandes ideas no han pertenecido jamás á la masa: las grandes ideas se llaman Sarmiento, se llaman Mitre, se llaman Roca... No quiero excluir a nadie que merezca estos títulos; me refiero á todos los hombres que han significado altas ideas dentro de nuestro país, hayan ó no tenido, con la capacidad suficiente para encenderlas en su espíritu, lo necesario para tramitarlas ó

para hacerlas viables en la opinión del país.

Señor presidente: he sostenido que el sistema uninominal es un sistema educativo, y precisamente lo he sostenido en contra de esa doctrina.

Efectivamente, señor, la ley de circunscripciones está encaminada, está orientada en la misma dirección; va buscando la formación de los grandes ideales, de las grandes colectividades, en persecución de una idea y de un espíritu superior. ¿Y de qué modo lo busca? Acercándose á la circunscripción, acercándose al barrio, queriendo ennoblecer, levantar, hacer partícipe á la circunscripción de aquello á que no puede ser ajena, es decir, del gran escenario en que debe verse representada, adonde van á dilucidarse las altas cuestiones que interesan por igual á toda la república.

En ese sentido la circunscripción suprime el comité, en lo que el comité tiene de malo y de nocivo; suprime el intermediario, extingue al caudillo minúsculo, por el cual, en nombre de la lista, se ha combatido el sistema de la circunscripción. ¿Y por qué? Está á la vista, señor presidente! Se ha llegado á una hora de decir toda la verdad en materia política. Cuando discutimos la ley de justicia de paz ¿no tuvo el señor diputado Padilla un arrebató de su elocuencia para pintar la situación que anualmente se presenta en la casa de gobierno y en la cámara de apelaciones, cuando se trataba de renovar la justicia de paz, por ejemplo? Todos sabemos efectivamente que las autoridades locales de la circunscripción, de la parroquia, se renuevan con ese criterio estrecho del caudillo inferior para influir en las elecciones futuras y llevar lo que él llama su caudal ó contingente al comité. Quiere, señor presidente, el consejo escolar, quiere el juez de paz, quiere el alcalde, quiere las comisiones de higiene.

Y yo digo, señor, en presencia de cada uno de los señores diputados elegidos aquí por el régimen de la circunscripción, si ellos para hacer política no tuvieran suficiente base de opinión como la que han revelado todos los que han llegado hasta aquí, y tuvieran necesidad de recurrir á esos manejos oscuros y en cierto modo subalternos ¿no habrían garantido por ese medio la formación dentro de cada núcleo, dentro de cada círculo, de un gobierno cir-

cunscriptcional levantado, honesto y seguro? (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Señor presidente: yo no puedo estar y no estoy fuera de las fatigas propias del debate, y dejando de lado infinitas consideraciones de este y otro orden con que pudiera seguir abusando de la paciencia de la honorable cámara para alargar un tanto más este debate, lo que no está por cierto en mi espíritu, necesito cumplir mi promesa de terminar.

Pero antes de hacerlo la honorable cámara me ha de permitir demostrar la conciencia y la honestidad con que hablo en todo momento ante ella, siquiera fuese necesario en algún instante el sacrificio de cualquier consideración personal, de amor propio por ejemplo.

El señor diputado Lucero dijo al final de su primer informe que el centro ó núcleo de la argumentación de la mayoría se encerraba en el hecho de que en ninguna parte en que rigiese el sistema uninominal se renovaban las cámaras parcialmente, y yo contestándole mas tarde, me referí al caso de la Bélgica. El señor diputado me rectificó. Cuando él me rectificaba, yo le dije: y el de Holanda. Ayer el señor diputado Carbo reprodujo el reto del señor diputado Lucero en cuanto se relacionaba con la Holanda. De manera que yo me quedaba sin la Bélgica y sin la Holanda (*Risas*).

Sr. Lucero—Sin los Países Bajos. (*Risas*).

Sr. Vedia—Sin los Países Bajos, dice el señor diputado, tan afecto á las formas oficiales, y yo acepto la corrección para designar á la Holanda con el nombre que política y diplomáticamente merece... No; me ha de permitir, sin embargo, el señor diputado que siga diciendo Holanda...

Sr. Lucero—Me es indiferente, si bien es sabido que la Bélgica y la Holanda constituyen los Países Bajos, desde donde me parece que el señor diputado ha perdido de vista que este debate no es bibliográfico, no obstante lo cual hemos de seguirlo en ese terreno y le hemos de seguir al señor diputado.

Sr. Vedia—Parlamentariamente, en cuanto á lo de Países Bajos, está bien el señor diputado; pero lo que me asusta es el plural que usa cuando dice: le vamos á contestar. Francamente, es alarmante para un modesto diputado, que viene con tan escaso bagaje á este debate.

Sr. Lucero—No contestaré yo al señor diputado, sinó el señor diputado Carbo, con quien me honré pluralizandome.

Sr. Vedia—El señor diputado sabe que le oigo con toda la consideración que me merece; pero no *contesten*: eso es lo que deseo.

Sr. Lucero—El señor diputado quiere eliminarme de la réplica? Perfectamente. No le contestaré por complacerle.

Sr. Vedia—No, señor; absolutamente! yo no quiero que no me conteste; digo que me alarmó la maza con que me amenazó antes de empezar y que podía haberme inclinado á cerrar los libros y escapar. (*Risas*).

Sr. Carbo—Puede decir muchas cosas.

Sr. Carlés—Sobre todo, creo que el señor diputado habla para la cámara y para el país y no para determinadas sectas políticas. (*Risas*).

Sr. Vedia—Tiene razón el señor diputado; pero en este caso ha equivocado él la dirección, como hoy la equivocó el señor diputado Oliver, á quien me remitió el señor diputado Lucero.

Efectivamente, la Bélgica no ha tenido un sistema uninominal. Al reconocerlo, no necesito explicar, ni siquiera por la deficiencia de los apuntes, el recuerdo que hice al respecto. Pero no se limitaba á contestar, en el caso de la Bélgica, con el hecho de que no se había tenido elección uninominal y leía á Flandin «Instituciones políticas», el primer tomo, donde dice que los belgas han manifestado siempre una gran aversión por el escrutinio uninominal, que representa á sus ojos la guerra de los caudillos, mientras la lista representa la guerra de los partidos.

Sr. Lucero—Más adelante...

Sr. Vedia—Sí, señor diputado.

Sr. Lucero—Es la opinión de Léger, miembro informante en el senado belga, cuando se discutía la ley. Léger era quien afirmaba, no una mera aversión del pueblo belga, sino que jamás ha estado en vigencia. Y un senador belga debe saberlo.

Sr. Vedia—Pero me refería á la cita de Flandin, que hizo el señor diputado.

Sr. Lucero—Esta opinión de Léger está en Flandin.

Sr. Vedia—Es un libro cuyo tomo primero, del año 1901, habíamos leído, probablemente más de una vez, cuando se dictó la ley en 1903. De manera que

la recomendación de que lo siga leyendo no me preocupa. (*Risas*).

«Se ha podido creer en un momento dado,—dice Duthoit en su obra «El sufragio de mañana»—que el escrutinio uninominal generalizado á todas las circunscripciones iba á ser propuesto por el gobierno. La dimisión de M. Smedt de Naeyer y la de M. Nyssens, adversarios declarados del sistema uninominal, parecían ser un indicio significativo.»

Ese ministerio cayó por ser adversario del sistema uninominal. Entonces Bélgica esperó que el nuevo ministerio propondría la reforma. Sin embargo, el nuevo ministerio se abstuvo de presentarla.

Los principales adeptos del sistema uninominal son Helleputte, diputado católico, profesor en la universidad de Louvain, presidente del congreso católico de Bruselas de 1892; Woeste, diputado católico, ex-ministro, verdadero jefe de la mayoría católica, hábil orador, espontáneamente agresivo, según un crítico; Bara, diputado liberal, ministro de justicia varias veces, uno de los oradores más notables, auxiliar poderoso del jefe de los diversos gabinetes Frére Orban. Todos estos representativos y directores de opinión en Bélgica, han luchado y han sostenido el sistema uninominal. De manera que si la doctrina no ha triunfado en la práctica, ha tenido por lo menos intérpretes elocuentes entre los dirigentes de las diversas agrupaciones belgas más poderosas, como la católica por ejemplo.

Señor presidente, voy á Holanda; esta parte es sumamente breve.

Naturalmente, cuando uno busca en su biblioteca, por modesta que sea, los libros de un país, tropieza con otro que no busca, con el que está al lado, con el que ha tenido antigua relación, y entra en deseos de dejar el que necesita para más tarde, aprovechando del placer que puede experimentarse con el vecino. Al llegar á las obras sobre Holanda encontré un libro de Fortoul, un viejo libro que recomienda estudiar las instituciones de ese país con el amor que merecen y con la simpatía que inspiran, y leí: «Esta Holanda que ha sido durante dos siglos la depositaria de las libertades del mundo y que vive entre sus diques, sus canales, sus praderas y sus molinos, modesta, sabia, apacible y feliz en sus viejos hábitos y en su jardín conquistado sobre el mar donde cultivaba siempre el patriotismo y el comercio, las bellas letras y la hospitalidad,

la libertad y los tulipanes.» (*Muy bien!* ¡*Muy bien!*)

El señor diputado Lucero me ha de permitir dedicarle esta pintura en gracia al cambio de nombre de que vengo haciendo uso.

Bien, señor: he dicho que en la Holanda... ahora voy á decir, para ser severo, *Países Bajos*. He dicho que en los Países Bajos, regía el sistema de elección uninominal y que la cámara se renovaba por mitad. Efectivamente, todos los señores diputados conocen el excelente libro «La Europa Política», de León Sentupery. Yo no necesito estar para este caso más ó menos al día. A este respecto el reclamo podría hacerse á esta famosa biblioteca de la cámara que desde hace veinte años estamos esperando y que no se constituye en la forma debida. Yo no estaba obligado á ponerme al día en materia de política de los Países Bajos. Me bastaba citar el caso: aquello que constituía el núcleo del informe de la mayoría estaba destruido desde el momento en que yo citase un ejemplo de país bien constituido; bien organizado, en que rigiera el sistema uninominal y las cámaras se renovasen por partes.

Así, señor, leyendo á Sentupery, me encontré con lo siguiente:

«Las elecciones para la segunda cámara tienen lugar cada dos años y se efectúan sobre la mitad de los miembros ó sean cincuenta. Estos diputados son elegidos por sufragio restringido. El año 87 el censo se abatió sensiblemente. Las provincias están divididas en circunscripciones de cuarenta y cinco mil almas que tienen que elegir cada una un diputado. Pero este sistema de escrutinio uninominal no era igualmente aplicado en todo el país: las grandes ciudades escapaban á él. El gobierno quiso que el escrutinio de *arrondissement* fuese uniformemente aplicado á todas las circunscripciones urbanas y rurales. El año 91 propuso la ley de las ciudades que ha sido finalmente adoptada. Notamos que en caso de desempate la ley neerlandesa limita la lucha en el segundo turno de escrutinio á los dos candidatos que figuran á la cabeza.»

Explicada, señor presidente, en esta forma, la razón de mis citas, debo terminar, y refiriéndome á una expresión ó juicio del señor diputado Lucero, sobre los *istas*, diré que en este momento no están absolutamente en debate, me pa-

rece, las personalidades políticas de mayor ó menor importancia, hállese dentro ó fuera de la República; y agregaré que, en materia de *istas*, me adhiero en este momento al que necesito para expresar con toda la fuerza de mi convicción mis afanes *circumscripcionistas*. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

He terminado.

Sr. Carbó—Pido la palabra.

Voy á decir simplemente dos palabras en lo que se refiere á la afirmación que hice en cuanto á la ley electoral de Holanda, pues las que ha pronunciado el señor diputado por la capital, muestran cómo él tenía razón para afirmar lo que dijo, desde su punto de vista, y con sus informaciones, y como yo, á mi vez, la tenía para hacer la mía.

Antes tenía Holanda un sistema mixto de elecciones, y elegía diputados por lista y uninominalmente, y hacia la renovación de la cámara como lo ha dicho el señor diputado Vedia. Pero, cuando cambió su sistema electoral, cambió también su modo de renovar aquel cuerpo representativo.

El autor que he citado antes, Pyffe-roen, dice: «El escrutinio, desde 1896, es puramente uninominal para las elecciones políticas. Antes de esta época, algunas grandes ciudades hacían excepción á esta regla. Los electores elegían, entonces, por el escrutinio de lista, nueve diputados para Amsterdam, cinco por Rotterdam, tres por La Haya, etc.»

Y más adelante, al exponer la situación actual, explica que la renovación se hace así: «Para la segunda cámara (que es la de diputados) integralmente cada cuatro años».

Nada más, señor presidente.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Para dejar constancia, ya que el señor miembro informante de la mayoría de la comisión no ha querido darse cuenta del alcance de mis palabras en la sesión anterior, que yo, diputado, que no vengo á este recinto á votar ideas sino proyectos de ley, voto en contra del despacho de la mayoría de la comisión, deplorando que el proyecto del señor diputado Lucero como el del ejecutivo nacional no hayan entrado á debate, para poder dar mi voto á su favor.

Mi voto, substancialmente, ha consistido en una convicción: creer que lo único que puede modificar las condiciones en todo cuerpo colegiado, judicial ó legislativo, del sufragio en la República Argentina, es el sufragio obligatorio.

Ahora bien; yo, que toda mi vida he sostenido y sostengo que el mundo político, como el mundo de las instituciones está regido por la simple pluralidad de sufragios, mantengo mis ideas, las declaro bien firmes y voto en contra del despacho de la mayoría de la comisión, por las razones que he expuesto en la sesión anterior.

Dejo, con estas palabras, perfectamente aclarada y definida mi situación en este debate, y conste que sólo lo he, hecho, obligado por las manifestaciones del señor miembro informante de la mayoría de la comisión.

Sr. Presidente—Si no se hace uso de la palabra, se votará el despacho de la mayoría de la comisión.

Sr. Oliver—Pido la palabra.

Varios señores diputados—Se está votando.

Sr. Oliver—Precisamente, me voy á referir á la votación.

Creo, señor presidente, que sería conveniente que la votación fuera nominal, y en ese sentido formulo moción.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Habiendo asentimiento general, se va á proceder á la votación nominal.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Barraquero, Pera, Barraza, Méndez, Cordero, Villanueva, Guevara, Martínez (J. E.), Acuña, Ponce, Alvarez (A.), Rodas, Figueroa, García Vieyra, Martínez (M.), Cernadas, Varela (H.), Lezica, Lamas, Fleming, Silva, Zavalla, Aldao, Castro, Amenado, Moyano, Campos, Parera, Leguizamón, Carbó, Lucero, Gigena, Vocos Giménez, Martínez Rufo, Lagos, Garzón, Argañarás, de la Serna, Carreño, Galiano, Padilla, Alvarez (J. E.), Parera Denis, Uriburu (F.), Gouchon, Demaría, de la Riestra, Lacasa, Pinedo (M. A.), Irigoyen, Contte, Bejarano, Martínez (J. A.), del Barco, Domínguez, Fonrouge, Monsalve, Vieyra Latorre, Yofre.

—Votan por la negativa los señores diputados Bustamante, Astudillo, Elordi, Peluffo, Gutiérrez, Berrondo, Latorre, Iriondo, Martínez (J.), Vedia, Carlés, Coronado, Ledesma, Oliver, Hernández, Argerich, Pinedo (F.), O'Farrell, Luro, Urquiza, Machado, Palacios, Romero, Bales-tra, Sivilat Fernández, Mugica.

Julio 15 de 1905

CÁMARA DE DIPUTADOS

11.ª sesión ordinaria

Sr. Secretario Ovando—Se encuentran presentes 85 señores diputados.

Han resultado 59 votos por la afirmativa y 26 por la negativa.

Sr. Presidente—Está en discusión en particular.

—Se lee el artículo 1.º

Sr. Lacasa—Hago moción para que artículo que no se observe, se dé por aprobado.

Sr. Presidente—Habiendo asentimiento general, así se hará.

—Se dan por aprobados los artículos 1.º, 2.º y 3.º

—En discusión el artículo 4.º

Sr. Gouchon—Pido la palabra.

Voy á votar el artículo propuesto por la comisión, pero voy á proponer un agregado, respondiendo á convicciones profundas que tengo sobre esta materia.

No voy á distraer la atención de la cámara sobre una cuestión que es muy conocida. Entiendo que los progresos políticos de nuestra época exigen que las leyes electorales den representación á las minorías. Tengo la persuasión, y he expuesto extensamente en mi discurso anterior mis ideas al respecto, de que, dentro de la constitución federal, cabe perfectamente un procedimiento indirecto para que las minorías tengan representación en la cámara de diputados.

La constitución no ha exigido sino dos condiciones fundamentales: que cada provincia sea un distrito electoral y que la elección se haga por simple pluralidad de sufragios; y cualquier ley electoral que llene estas dos condiciones, encuadra dentro de la constitución.

Entonces yo propongo, después de la palabra *distrito*, este agregado: «disminuido en tantos enteros cuantos sean los del cuociente que resulte de su división por cuatro, y acumulará sobre uno ó más candidatos tantos votos cuantos sean los que exprese el cuociente».

En una palabra, con esta disposición en la ley electoral, las oposiciones podrán obtener una representación proporcional á sus fuerzas, y cada elector podrá acumular la cuarta parte de sus votos.

Este proyecto no es, por supuesto,

una innovación; es el resultado de la experiencia universal. Se ha ensayado el sistema del cuociente, con dificultades, serias, puesto que divide los partidos hasta el infinito. Se ha ensayado el voto acumulativo en Chile y otros países, con grave perjuicio de la marcha gubernativa.

Toda ley electoral, á mi juicio, debe tender á asegurar al gobierno de la mayoría, pero también á permitir que las minorías puedan hacerse oír. La mayoría gobierna; la minoría interviene en la deliberación, controla la acción de la mayoría.

Creo, señor presidente, que, en obsequio á los intereses permanentes de la república y con el pensamiento de gobierno de asegurar la paz pública, es necesario que el gobierno y las mismas cámaras tengan, como defensa contra la natural tendencia del hombre á absorberlo todo, el control de las minorías. (*Muy bien!*)

Siento que en este país no se haya producido un debate sobre estas cuestiones. Constató con dolor esta circunstancia: nuestros grandes diarios, en presencia del debate de la ley electoral, no se han avocado al estudio de ninguna cuestión, de las múltiples que comporta una ley electoral, para ilustrar la opinión pública sobre una materia tan fundamental, sobre una cuestión que afecta directamente la vida y la existencia misma de los partidos y no han propuesto soluciones para asegurar el ejercicio de los derechos políticos, y la representación de los diversos matices de la opinion.

Cumpro con el deber de someter una solución á la deliberación de la cámara, sin abrigar esperanzas sobre el éxito inmediato y solo con el propósito de promover el estudio y debate de esta cuestión. Creo que no hay necesidad de la reforma de la constitución; y que cuando los hombres de estudio y de talento del país, cuando la opinión pública se ilustre sobre este punto, se formará la convicción de que realmente dentro de nuestra carta fundamental cabe un procedimiento para dar representación á las minorías, y por eso no dudo que esto será una de las principales preocupaciones del congreso en uno de sus próximos periodos de sesión.

He dicho.

Sr. Demaría—Pido la palabra.

La cuestión tan fundamental que plantea mi distinguido colega el señor di-

putado por la capital, me obliga á anticipar ó por lo menos á anunciar á la cámara una moción que tenía el proyecto de formular una vez terminada la votación en particular del despacho en debate.

Yo pienso como el señor diputado, que es indispensable buscar la representación de las minorías en el parlamento. Pienso que esa es una necesidad fundamental para la estabilidad de los poderes públicos, para su existencia regular, porque creo que cuando esas minorías no tienen el derecho de venir al parlamento á hacer oír sus disconformidades de toda la opinión del país, buscan otro medio ú otras formas necesariamente perturbadoras y funestas para llegar á ese resultado.

No desearía anticiparme, no deseo entrar á ese punto. Puede haber respecto de las ideas que el señor diputado ha enunciado, cuestiones fundamentales, porque, por lo menos yo, abrigo profundas dudas sobre si sería posible encontrar la forma de encuadrar dentro de la prescripción constitucional que establece que todos los diputados serán electores á pluralidad de sufragios, la forma científica y constitucional de traer á esta cámara la representación de las minorías.

La cámara se ha encontrado en presencia de dos despachos originados por la misma causa, pero recayendo propiamente sobre materias distintas. (*Muy bien!*)

El despacho de la mayoría se pronuncia abiertamente por el restablecimiento del sistema de lista y el despacho de la minoría aconseja una reforma constitucional. A mi juicio, son materias completamente distintas. Dentro de la acción normal de las prácticas parlamentarias, correspondería que el despacho de la minoría fuera á morir en el archivo; pero entiendo que es el caso de presentar la moción que anticipaba que formularía una vez terminada la votación del proyecto en debate, de que ese despacho vuelva á comisión, porque entiendo también que una cuestión de trascendencia política é institucional como es la reforma de la constitución, no puede ser afrontada sin que haya sido materia de hondas é intensas preocupaciones de todos y cada uno de nosotros, sin que haya sido materia también de la necesaria gestación, de la indispensable elaboración política que es ineludible

se realice antes de llegar á transformar en hechos una idea de esa magnitud. (*Muy bien!*)

Por esa razón, no es posible, procediendo con un criterio político y de hombres de gobierno, afrontar en este momento, después de votado el despacho de la mayoría, la votación del despacho de la minoría. Pero creo que el camino que indico de mandar á comisión nuevamente ese despacho, deja la cuestión pendiente, llamando la atención del país, llamando la atención de la prensa y de los principales hombres de gobierno sobre la necesidad vital de traer á esta cámara la representación de las minorías y dando tiempo á que esa necesaria elaboración se produzca.

He dicho. (*Muy bien! Muy bien!*)

Sr. Presidente—Lo que propone el señor diputado por la capital es un agregado al despacho de la comisión. ¿La comisión acepta?

Sr. Lucero—Pido la palabra.

Sr. Demaría—Podría pasar á comisión la moción del señor diputado junto con el despacho.

Sr. Uriburu (F.)—Que pase á la comisión la moción del señor diputado Gouchon.

Sr. Gouchon—Pido la palabra

No tengo mayor interés en que recaiga una votación sobre el agregado que he propuesto. Mi propósito es plantear precisamente esta cuestión para que sea dilucidada por la opinión pública en la prensa y en la tribuna; y como el señor diputado Demaría propone que el despacho de la minoría vuelva á comisión, no tengo inconveniente en que conjuntamente con el estudio que hará sobre la necesidad de la reforma constitucional, inquiera también si cabe solucionar el problema de la representación de las minorías, sin necesidad de esa reforma.

Sr. Demaría—¡Ojalá se encontrara!

Sr. Presidente—Se votará en opor-

—No haciéndose observación al artículo 4.º, se da por aprobado.

—Se aprueban sin observación los demás artículos del proyecto.

Julio 15 de 1905

CÁMARA DE DIPUTADOS

11.ª sesión ordinaria

7

Sr. Presidente—Se va á votar la la moción del señor diputado Demaría, para que vuelva á comisión el proyecto de la minoría juntamente con la proposición del señor diputado Gouchon.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Invito á la honorable cámara á levantar la sesión.

—Así se hace, siendo las 7 y 30 p. m.